

**UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
SEDE ECUADOR**

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

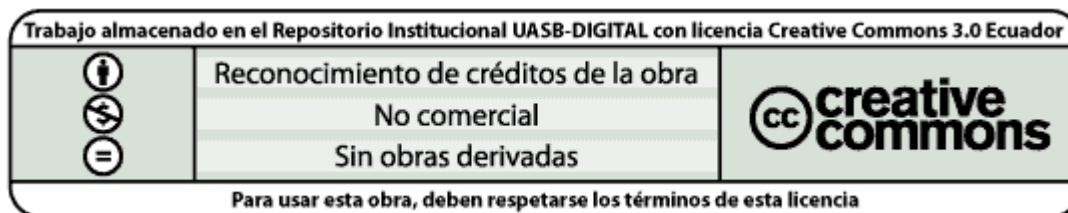
INFORME DE INVESTIGACIÓN

**LOS LIDERAZGOS MILITARES – CIVILES: LOS CASOS DE
ECUADOR Y VENEZUELA**

DIEGO FRANCISCO PÉREZ ENRÍQUEZ

**QUITO-ECUADOR
2004**

Se trata de una versión modificada por el autor antes de su colocación en el Repositorio Institucional UASB en el año 2014.



Abstract

La doctrina militar latinoamericana ha provisto a los institutos armados de la región de concepciones que justifican la intervención en el sistema democrático cuando la patria está en peligro. Ante las ineficiencias del sistema político y las profundas tensiones sociales bajo las que vivía Venezuela y Ecuador en 1992 y 2000, facciones de la institución armada intervinieron para imponer como solución la total reforma del sistema político. A pesar de lo fugaz de estos movimientos, sus líderes se posicionaron en el imaginario popular como una suerte de héroes de la nueva independencia. Utilizando un discurso antipolítico, Hugo Chávez alcanzó la presidencia venezolana en 1998, y retomando los mismos elementos discursivos Lucio Gutiérrez logró también la presidencia ecuatoriana en 2003. No obstante, las distancias entre los dos presidentes tienen un origen ideológico, que se vuelve más evidente en la dirección gubernamental de cada uno. Un elemento que en el fondo acerca las posiciones de los dos presidentes es la preservación de la estabilidad de su mandato, aunque la forma de lograrlo es diametralmente opuesta, pues mientras en Venezuela se intenta relegar a la vieja clase política, en Ecuador la estrategia utilizada es aliarse con esa clase. Al final, los partidos dirigidos por estos coroneles ingresaron al sistema político generando grandes expectativas cuyo cumplimiento puede señalar la fundación del nuevo Estado, mientras que su falla al hacerlo significará un paso deslucido por la presidencia.

Los liderazgos militares – civiles: los casos de Ecuador y Venezuela

Introducción

Las fuerzas armadas latinoamericanas han cumplido constantemente y a lo largo de toda la historia de sus países con un indiscutible rol político, mismo que las ha puesto en posiciones que han variado desde la administración abierta y sin ambages del Estado, hasta la “protección” discreta, menos evidente, de la democracia. Con el retorno a la democracia inaugurado para la mayor parte de la región con la transición ecuatoriana de 1979¹, los análisis veían en el futuro la construcción de democracias sólidas, estables, en las que los institutos armados se limitarían a sus actividades profesionales, dejando el ejercicio de la política para los civiles. No obstante, tales visiones fueron cayendo poco a poco bajo el peso de las dificultades económicas, las dolorosas reformas estructurales y la brecha de la inequidad cada vez más amplia. Para 1993, cuando las transiciones terminaron con el proceso paraguayo, los intentos golpistas, levantamientos y pronunciamientos habían salpicado a toda la región, registrándose un total de 25 hechos protagonizados por miembros de las fuerzas armadas con la pretensión de desestabilizar, reemplazar o advertir a los gobiernos existentes².

Desde una perspectiva histórica no se puede concebir a la política de la región sin incorporar en el análisis a la corporación militar. Desde las batallas independentistas, ésta ha cumplido un rol libertador, civilizador, modernizante, creador de instituciones y represivo (a veces en contra de los fundamentos democráticos, otras por defenderlos), que en lo doctrinario y en lo instrumental ha nutrido su imaginario de inserción en el sistema político. El cumplimiento de cada uno de estos papeles le ha otorgado un amplio poder decisorio en los sistemas políticos ecuatoriano y venezolano, caracterizados por un

¹ Como se verá, la transición en Venezuela tuvo lugar en 1958. No obstante, este fue un caso particular que no provocó procesos similares en la región, mientras que la transición ecuatoriana sí fue el inicio de una serie de transiciones posteriores.

² Este número, contabilizado desde 1978, incluye los golpes que miembros de FFAA han efectuado en contra de sus compañeros de armas al mando del gobierno. Tomado de: LOVEMAN, Brian, For La Patria, Politics and Armed Forces in Latin America, Scholarly Resources, Wilmington, 1999, Tabla 7-7

funcionamiento clientelar. Estos sistemas en su relación con las FFAA, históricamente, se pueden resumir en momentos de manipulación, subyugación y aislamiento, en los que políticos y militares asumían uno de estos roles frente al otro actor. No obstante, el aislamiento que caracteriza la fase final de la relación se quebró con la aparición de actores políticos extra sistémicos, nacidos de un cuartel, pertenecientes a la oficialidad media, que pretendieron terminar con el orden constitucional en defensa de los intereses nacionales y de la patria.. Este rompimiento constitucional que condujo al apareamiento de Hugo Chávez y Lucio Gutiérrez, en 1992 y 2000, no es sorprendente *per se*, pues las intervenciones militares en el sistema democrático latinoamericano ocurren indefectiblemente cuando se reúne un cierto número de circunstancias. Así, este documento aborda la intervención militar, siguiendo la tesis de Fitch, como un elemento característico del sistema político ecuatoriano, mismo que por su regularidad y antecedentes más o menos similares, hacen que la “... política sea, en un sentido, ultraestable”(1986). Como se verá, el ambiente conducente al golpe también es el mismo en Venezuela, al igual que lo es la concepción militar de su relación con la política y la sociedad, de allí que esa “estabilidad” indicada por Fitch existe bajo condiciones similares en toda la región.

De la mano de los líderes de los *putschs* en Venezuela y Ecuador nacieron partidos caracterizados por la extracción netamente castrense de sus integrantes, defensores del nacionalismo y detractores del sistema político nacional e internacional imperante. No obstante, estos partidos debieron incorporar civiles y aliarse con partidos actuantes en el sistema que repudiaban para acceder a las funciones presidenciales. En cada caso, el ascenso al poder de estos actores extra – sistémicos hace pensar en el fin de la política dominada por partidos elitistas, detentadores incontestables del poder, y permite vislumbrar un periodo en el que la ciudadanía se apropiará de este y dará nuevo valor a la democracia. Para los dos países, los fundamentos de estas expectativas son altamente sentimentales y personales, pues la idealización del militar como baluarte de la moral, la honestidad y la capacidad profesional se personaliza en estos coroneles que arriesgaron todo por poner fin al injusto sistema que ha sumido a sus países en la pobreza. De allí que el cumplimiento de tales expectativas genere fuertes respaldos, mientras que la falla ocasiona profundos

desencantos; produciéndose estas dos circunstancias con relación al líder antes que al partido.

Este asentado carácter personalista es el resultado de una especial mezcla entre caudillismo, populismo y doctrina militar. Así, el “comandante” del partido es el responsable único de todas las decisiones, quienes están por debajo de él las aceptan con lealtad, sin cuestionamientos y proceden a ejecutarlas; de igual forma, la figura popular del partido es la que permite el acceso al poder de su grupo, y ésta no puede suplantarse por otra sin correr el riesgo de perderlo; y, la figura del fundador del partido es la que hace que su *retinue* goce de los beneficios del poder, en tanto ésta apoye su gestión. En todo caso, desde cualquier perspectiva, las pifias o los aplausos con que el pueblo responda ante las acciones del caudillo, del líder popular o del comandante, se le endosan íntegramente. Por tal característica organizativa de estos partidos de ex – militares que intentan jugar en el campo civil de la política, a lo largo del texto que sigue se intercalarán los nombres de sus líderes con el de su movimiento o partido, pretendiendo en todo momento significar la agrupación política a la que dirigen, aunque, como se dijo, este límite entre organización e individuo puede ser borroso.

Con el fin de la claridad, es preciso también indicar el carácter de dos términos que se utilizan frecuentemente, especialmente en la primera parte del texto. Al hablar de relaciones políticas – militares, la referencia es a las relaciones que mantienen partidos y élites políticas, sea desde el gobierno o la oposición, con la institución militar debidamente representada por los más antiguos en su cadena de mando, mientras que cuando se hace mención a las relaciones civiles – militares, la intención es señalar a la relación existente entre todos los miembros de la institución castrense con toda la sociedad civil, independientemente del lugar dirigencial o no que ocupen los individuos.

Este análisis busca señalar como se ha construido un nuevo actor social a partir de la capitalización del apoyo popular que tuvo la intervención militar en Venezuela y Ecuador, misma que fue consecuencia de la degradación en las condiciones de vida de su población. Como se indicó, el golpe militar no es atípico en el sistema político latinoamericano

(aunque ha perdido viabilidad, las condiciones doctrinarias que lo originan subsisten, a la espera de las condiciones propicias), pero si lo es este aprovechamiento del golpe para proseguir una carrera política. Aunque Ramón Pérez Jiménez lo hizo en Venezuela después de su destitución, esta actuación le permitió únicamente llegar al Senado, mientras que la presidencia fue una opción a la que no logró acceder constitucionalmente. La fugacidad de estos golpes se constituyó en su fortaleza y la apelación a las altas necesidades nacionales que lo originaron, fue el discurso de campaña.

Existen antecedentes históricos que obligan a buscar la conformación del Movimiento Quinta República (MVR) de Venezuela y del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) de Ecuador en la historia de la institución militar en Latinoamérica, misma que doctrinariamente dio forma a las insurrecciones militares del 4 de febrero de 1992 y del 21 de enero del 2000. Para ello, los textos de Alain Rouquié y Brian Loveman son la columna vertebral alrededor de la que se analizara la historiografía de las relaciones civiles – militares y políticas – militares latinoamericanas, mismas que se reproducen con bastante exactitud en los casos particulares venezolano y ecuatoriano. De allí, el tema del control militar circunscribirá con mayor precisión la situación de las fuerzas armadas de los dos países en los momentos previos al golpe, una constatación que se contrastará con la auto concepción de las FFAA sobre su misión ante la patria y el incentivo que el ambiente político prevaleciente significó para su intervención en las fechas indicadas. La segunda parte revisará la coyuntura política post – golpe y cómo la necesidad de restablecer la estabilidad llevó a que se conceda la amnistía a los líderes de los movimientos militares insurreccionales; después se estudiarán el carácter de la conformación del MVR y del PSP con miras a las elecciones presidenciales y cuáles fueron las líneas de acción primordiales que han llevado adelante los gobiernos de los coroneles en las áreas de reforma política del estado, economía, relaciones con las FFAA y política exterior, con un enfoque especial en la relación con los Estados Unidos. Para finalizar, la tercera parte estudia el carácter de las relaciones que el MVR y PSP mantienen con la antigua clase política en sus países y cómo ésta puede influir en la preservación del partido en el largo plazo. Con fines metodológicos, el texto mantiene el orden cronológico en el análisis, por lo que en cada sección se revisa primeramente el caso venezolano y posteriormente el ecuatoriano.

1. Antecedentes nacionales.

Historia de las Fuerzas Armadas en América Latina

Entender la aparición del Movimiento V República y del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero demanda buscar los orígenes de algunos de sus planteamientos y actuaciones en el gran contexto de la historia política – militar de Venezuela y Ecuador, a pesar de que el alcance de este documento impide detenerse demasiado en ellos. De la misma manera, la lógica de funcionamiento del sistema político civil en estos países provee el fundamento necesario para entender esta *migración* de los cuarteles a las sedes partidistas y a la Presidencia, por lo que es necesario analizar con la misma brevedad el periodo político que tiene lugar desde la transición a la democracia (1958 en Venezuela y 1979 en Ecuador) hasta la irrupción en el funcionamiento del sistema y su incorporación en él de los líderes de MVR y PSP.

Desde la perspectiva de la historia política – militar latinoamericana, Alain Rouquié define tres momentos básicos en los que se construyó la actual posición de las Fuerzas Armadas como un actor político³. Si bien la separación entre uno y otro, evidentemente, no es de limpieza *quirúrgica*, la intención aquí es presentar la gran tendencia sin precisar los obstáculos que implicó la transición entre cada uno.

El primero hace referencia a los momentos posteriores a la independencia, cuando los ejércitos difícilmente podían considerarse profesionales, pues en realidad eran una mixtura de soldados voluntarios, soldados reclutados a la fuerza y mercenarios extranjeros, todos bajo el comando de oficiales de dudoso profesionalismo, pues pocos eran los que había obtenido tal grado después de estudiar en las academias militares españolas. Una vez cumplida su misión emancipadora prácticamente se desbandó al ejército, pero estas fuerzas mantuvieron su lealtad – por conveniencia o necesidad – al oficial que las comandaba. Naturalmente, los próceres independentistas mantenían un capital político potencial de importancia, pero éste debía concretarse, resguardarse e incrementarse si es que la pretensión era acceder a la dirección del Estado, asegurarse monopolios económicos u otra

³ Ver: ROUQUIÉ, Alain, L'État militaire en Amérique Latine, Éditions du Seuil, Paris, 1982.

clase de beneficios. En tal situación el número de las milicias leales a un individuo se constituían en el “...origen de la autoridad política de corto plazo, a través de la delegación de poderes de emergencia y facultades extraordinarias”(Loveman,1999:33) a favor de quien buscaba hacerse con el poder. Aunque legalmente no eran las milicias las que entregaban estos poderes y facultades extraordinarias, en lo práctico, solo ellas aseguraban que el caudillo al que respondían las pudiera mantener. Por su parte, los caudillos generalmente representaban intereses regionales o de clase⁴ que no necesariamente concordaban con los del Estado, aún en formación. Así, este periodo de “*militarismo sin militares*”, según Rouquié, se caracteriza por la necesidad de la utilización de la fuerza militar como sustento para proyectos políticos personales; la alta rotación de la posesión efectiva del poder, cambiante según la fuerza relativa que posea un actor frente a otros; y la inexistencia del monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del Estado.

La segunda fase comienza tras la consolidación del Estado una vez que las milicias caudillistas se han extinguido y se ha logrado imponer la existencia de un verdadero ejército nacional. En este periodo “...la transferencia de lealtades del jefe a la figura impersonal del Estado no es un proceso ni simple ni espontáneo”(Rouquié, 1982:82), pero comienza a darse gracias a que las clases dirigentes imprimen una dirección sobre el Estado, misma que empuja, o arrastra, a las instituciones a funcionar con miras a esos objetivos. Con ese fin la profesionalización de las fuerzas armadas es fundamental y por ello se empiezan a educar a oficiales con valores corporativos y una visión institucional común. Existen debilidades institucionales militares en este periodo originadas por dos inconsistencias que conviven hasta alrededor de 1925, cuando los oficiales al mando han seguido la carrera militar profesional desde sus inicios. La primera se da justamente por la coexistencia de oficiales superiores que alcanzaron su puesto gracias al intercambio de favores con el individuo que detenta el poder político, junto con oficiales de grados más bajos que se están formando doctrinariamente bajo el criterio de unas fuerzas armadas apolíticas, profesionales y ocupadas de sus asuntos. La segunda inconsistencia nace justamente de la formación que están recibiendo los oficiales jóvenes: las misiones

⁴ Los términos *intereses regionales* e *intereses de clase* se los debe tomar en un sentido limitado, pues por lo general estos intereses eran aquellos que el caudillo consideraba dignos de defenderse según sus conveniencias personales, sus perspectivas políticas o su balance de favores adeudados.

militares extranjeras les hablan de “... la necesidad de modernización técnica y económica como fundamentos para la profesionalización y la seguridad nacional”(Loveman, 1999:64), pero nada de esto se puede obtener sin contar con la decisión política. El resultado de estas inconsistencias es que estas fuerzas armadas nacionales aún deben mantener su relación con los políticos civiles, sea porque aún existen saldos pendientes en las cuentas de favores (el caso de los oficiales antiguos), o porque esperan que la aceptación de la política de los civiles eventualmente les garantizará los insumos necesarios para una mayor profesionalización institucional (en el caso de los oficiales jóvenes). Por el motivo que fuere, durante este periodo los oficiales están subordinados al poder civil. Los problemas provocados por esta condición de “control civil subjetivo”⁵ se evidencian en el continuo uso de las tropas por parte del poder civil para “asegurar” resultados electorales, amedrentar a la oposición o prolongar la permanencia en el poder. En resumen, existe una estructura militar nacional debilitada por la fractura doctrinaria entre sus oficiales viejo y jóvenes, misma que es utilizada por las fuerzas políticas para alcanzar sus objetivos.

La doctrina impartida por las misiones extranjeras siempre resaltó la necesidad de fuerzas armadas apolíticas, no obstante conseguir tal condición implicaba que estas tuvieran acceso al desarrollo tecnológico y que la sociedad en su conjunto se modernizara. Estos insumos necesarios para su profesionalización no estaban garantizados en tanto los civiles, que utilizaban a las fuerzas armadas para fines personales, se mantuvieron en el poder. La necesidad de mayor autonomía frente al poder civil se hizo evidente, por lo que las fuerzas armadas buscaron profundizar su profesionalización invitando a nuevas misiones militares extranjeras o extendiendo el trabajo de las ya existentes. También, en esta tercera fase de “militarización de los militares”, estos se hicieron con el poder para garantizar su autonomía, implementar su proyecto político de modernización e institucionalización de la sociedad. Irónicamente la profesionalización que pretendía conseguir fuerzas armadas apolíticas arrojó unas fuerzas más independientes del poder civil, críticas del mismo, con

⁵ Sobre los diferentes tipos de control a las Fuerzas Armadas el análisis clásico es el que presenta HUNTINGTON, Samuel, en *El Soldado y el Estado*, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1995; y del mismo autor *Fuerzas Armadas y Sociedad: reformando las relaciones cívico militares*, en *La Política*, revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad, No. 2, Segundo semestre, 1996. Para un análisis sobre este control en Latinoamérica ver: FITCH, Samuel, *Hacia un modelo democrático en las relaciones civiles militares para América Latina*, en *Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica*, CORDES, Quito, 1988.

una visión muy definida de la sociedad que deseaban construir, intenciones para las que, según consideraban, los civiles, específicamente los políticos, eran una cortapisa.

Cada una de estas fases formó los imaginarios en que operan las fuerzas armadas latinoamericanas, volviendo a sus miembros concientes de que su lealtad mayor se la deben a *la patria*⁶, más allá de los planteamientos constitucionales existentes. De esta manera, si *la patria* tenía que soportar gobiernos enfocados a la satisfacción de intereses particularistas, aunque estos se hubieran elegido democráticamente, ese abstracto fin superior debía preservarse, y tal misión ha recaído siempre en los militares. Bajo estas condiciones en que los actores castrenses tienen por objetivo principal la preservación de la autonomía institucional con el fin último de imponer un modelo de Estado que defienda el abstracto de *la patria*, las fricciones entre civiles y militares crecen alrededor del tema del control que los unos pretenden imponer sobre los otros.

Control civil a los militares.

Precisamente en torno al tipo de control comienzan a estructurarse las diferencias primigenias entre MVR y PSP, pues la ruptura institucional en Venezuela se da más como consecuencia de las ineficiencias del sistema político, mientras que en Ecuador esas ineficiencias son el catalizador de esta ruptura, pero su causa esta en la *faccionalización* al interior del instituto armado. Conocer el carácter de la relación que se ha forjado entre civiles y soldados desde el momento de la transición a la democracia en los dos países permitirá vislumbrar la profundidad del impacto psicológico en las masas, y la acumulación de expectativas que el rompimiento del orden democrático significó para cada país.

1958 inició la transición a un gobierno civil y democrático tras diez años de dictadura militar en Venezuela. La caída del gobierno del Gral. Marcos Pérez Jiménez inauguró los

⁶ Aquí el concepto de *la patria* se lo toma de aquel presentado por Brian Loveman, (Op. Cit.) donde ésta sería no solo la nación (es decir los elementos comunes a un grupo de individuos que comparten lengua, creencias religiosas, etc.), ni solo el Estado (la nación organizada políticamente), sino "...la nación – estado con identidades asociadas al territorio, la cultura y la historia" (p. XVIII), identidades que han sido idealizadas y que son únicas y comprensibles únicamente por sus "hijos". En esta lógica, los militares no solo la deben defender de los enemigos externos, sino de quienes amenazan estos valores idealizados que la configuran, por lo que su misión es constante y raya en la misión eclesiástica durante la inquisición: quemar a los herejes y evangelizar, así sea por la fuerza, a quienes no conocen la "verdad".

40 años de estabilidad democrática, la excepción en la regla de la militarizada Latinoamérica. Durante este largo tiempo la no-intervención militar se da como consecuencia de un acuerdo político, el Pacto de Punto Fijo, en el que los líderes de los partidos políticos venezolanos buscaban fundir en un todo a partidos políticos, civiles y militares. Pero, en los primeros momentos del *punto fijismo* “... la estabilidad del régimen democrático no vendrá tanto por la unión de los partidos y de las Fuerzas Armadas, sino por la división de estas últimas”(Caballero, 2000:21), pues sufren de politización (con grupos de izquierda que tienden a fortalecerse dentro de la institución) y de desconcierto sobre cuál debía ser su rol en el nuevo periodo democrático. La segunda preocupación se diluyó al conocerse el proyecto de sociedad planteado por el presidente Rómulo Betancourt (1958 – 1962), que consideraba la existencia de un ejército profesional capaz de defender al país y resguardar la democracia como uno de los cinco pilares sobre los que debía erigirse la nueva sociedad venezolana⁷. En cuanto a la politización, con el paso del tiempo ésta pasó a segundo plano gracias a que las fuerzas armadas fueron excluidas de todo debate político –de hecho uno de los puntos acordados en Punto Fijo había sido la renuncia de los civiles a golpear las puertas de los cuarteles para garantizar fines políticos–. En segundo lugar, se garantizó el profesionalismo marcial a través de programas que garantizaban posibilidades de acceder a estudios universitarios a los oficiales, “... un programa de seguridad social que incluye sueldos altos, prestaciones sociales, vivienda, salud y retiro con pensiones adecuadas” tras 30 años de servicio; ventajas estas que aseguraban bajos niveles de conflictividad con la institución castrense y “... alta movilidad en sus cuadros superiores de mando, lo que impedía la generación de liderazgos”(Müller – Rojas, 1988:268-269) estables que pudieran llegar a organizarse y contestar a la democracia de partidos existente. Así, durante 40 años el control civil de los militares en Venezuela podría, en buena medida, considerarse inscrito dentro de lo que Huntington calificó como “control civil objetivo”⁸.

⁷ Los otros cuatro pilares son los partidos políticos, los sindicatos, el empresariado, y la Iglesia. Ver: CABALLERO, Manuel, La gestación de Hugo Chávez: 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000.

⁸ Huntington considera la existencia de este tipo de control cuando se constata la confluencia de los siguientes elementos en la naturaleza de las relaciones civiles – militares: 1) profesionalismo castrense, y, 2) autonomía del poder político en lo relativo a los procesos de toma de decisiones dentro de la institución. Ver: HUNTINGTON, Samuel, en El Soldado y el Estado, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1995; y del mismo autor Fuerzas Armadas y Sociedad: reformando las relaciones cívico militares, en La Política,

En Ecuador la transición a la democracia tiene características temporales y pragmáticas diferentes, lo que arrojó también resultados diferentes en cuanto al tipo de control civil sobre las Fuerzas Armadas. Iniciado en 1979, este proceso se dio por iniciativa militar, pues los civiles, y especialmente los grupos de izquierda, “... no querían que se vayan los militares”⁹. Sin embargo, la dinámica económica mundial vaticinaba la proximidad de un periodo de crisis, y el costo político de los ajustes que implicaría controlarla harían una grave mella en su proyecto institucional de largo plazo. Por otra parte, la institución necesitaba garantizar su cohesión, afectada por criterios divergentes dentro de los cuarteles sobre la pertinencia de la continuidad en el poder. Así, el 10 de agosto de 1979 se entregó el poder a Jaime Roldós, el primer Presidente del nuevo periodo democrático. Pero toda entrega unilateral de poder significa que las reglas del juego, para lo posterior, ya se han establecido, y se han tomado las medidas necesarias para asegurar su respeto. Así, la democracia ecuatoriana comenzó a funcionar bajo una serie de reglas diseñadas por los militares que tenían como elemento medular el respeto civil por la autonomía castrense, mismo que se refleja en prerrogativas que “... están relacionadas con distintos aspectos de la política nacional y abarcan campos que bajo un orden constitucional deberían estar en manos de civiles”(Olano, 2001:45). Así, los espacios o prerrogativas reservadas para la actuación marcial no contestada desde la civilidad tienen que ver con:

- El rol independiente de los militares en el sistema político.
- El comando en el diseño y ejecución de la política de defensa, presupuesto militar, educación profesional, formulación de doctrina y operaciones militares,
- La posición de asesores y consejeros presidenciales en cuestiones de seguridad y defensa.

revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad, No. 2, Segundo semestre, 1996. No obstante, Miguel Manrique, en: Participación política de las Fuerzas Armadas Venezolanas en el sistema político (en: Comisión Andina de Juristas, Las Fuerzas Armadas en la Región Andina ¿no deliberantes o actores políticos?, CAJ, Lima, 2001), presenta una visión opuesta a este enunciado, al señalar que entre 1958 y 1998 “...primó un modelo de intervención indirecta, caracterizado por el derecho a veto de parte de las decisiones del sistema político, de los altos mandos militares” (p.309), hecho que denotaría la inexistencia del tipo de control señalado. Ésta es una tesis que debe ser estudiada con mayor detenimiento, y que de hecho se inscribiría en la lógica regional de las relaciones civiles – militares, no obstante, preliminarmente y en honor a los límites de esta investigación, se toma la existencia del control civil objetivo como característico de la relación político – militar en Venezuela, por cuanto la sucinta evidencia señalada así permitiría demostrarlo. Ver también: GÓMEZ CALCAÑO, Luis y PATRUYO, Thanali, Venezuela: entre la esperanza popular y la crisis económica, Sala de Lectura CLACSO, 1999, www.clacso.org

⁹ Entrevista a Bertha García, 12 de septiembre, 2003.

- Autonomía y control de los servicios de inteligencia.
- Control sobre promociones y asignaciones profesionales de sus miembros.
- Un papel activo en la administración de empresas del Estado, sea a través de posiciones en sus directorios o en el manejo ejecutivo de las mismas.
- Mantenimiento de un fuero privativo sobre sus acciones.
- Amplios espacios para misiones de desarrollo interno¹⁰.

Durante estos 25 años se ha evidenciado el uso de estas prerrogativas en pronunciamientos en contra de candidatos considerados una amenaza al Estado por su populismo, la furiosa reacción de los comandantes de la institución cuando los civiles han pedido un rendimiento de cuentas, un ejercicio meramente formal de discusión pública de la política de defensa ecuatoriana¹¹, vetos y vistos buenos para sucesiones presidenciales, etc.

Bajo esta visión, entonces, puede entenderse la profundidad de la diferencia en la relación civil – militar entre Venezuela y Ecuador. En este último ha imperado una lógica de “democracia protegida”, es decir, de un sistema que funciona figurativamente como una democracia liberal, pero que siempre está bajo la vigilante supervisión de unas fuerzas armadas caracterizadas por estar: 1) siempre prestas a intervenir para “*desfacier tuertos*” provocados por los políticos civiles en el sistema que dentro de esta lógica se llama “*democracia*”, y, 2) situadas por encima de las posibilidades legales de control que la sociedad pudiera ejercer sobre ellas. Venezuela, en tanto, funciona bajo la lógica de la mutua indiferencia en lo referente a las relaciones políticas – militares: mientras los políticos no busquen a los militares y les garanticen los beneficios institucionales expuestos, las tropas no tienen motivo para salir de los cuarteles.

¹⁰ Estas prerrogativas se han compilado y adaptado a la particularidad ecuatoriana a partir de aquellas presentadas para Latinoamérica por LOVEMAN, Brian, For La Patria, Politics and Armed Forces in Latin America, Scholarly Resources, Wilmington, 1999; y, STEPAN, Alfred, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone, Princeton University Press, Princeton, 1988.

¹¹ Para una revisión *in extenso* sobre el proceso, ver: PÉREZ ENRÍQUEZ, Diego, La construcción del libro blanco de la defensa del Ecuador, Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2003.

Genotipo y fenotipo militar: la reacción ante el sistema

Pero, la misma formación militar impide la indiferencia cuando se ve amenazada la existencia de la patria. Los ejércitos latinoamericanos se percataron de esta realidad poco después de la consolidación del Estado nacional, y terminaron de apropiarse de ella tras la aprehensión de las enseñanzas impartidas por las misiones militares extranjeras. Como se mencionó previamente, cuando las Fuerzas Armadas toman conciencia de que alcanzar una profesionalización al estilo prusiano o francés exige la existencia de un Estado fuerte que financie las carreras militares, con un elevado grado de desarrollo político y social, y que cuente con acceso a tecnología de avanzada, y enfrentan esa lista de requisitos a su realidad nacional, el resultado arrojado habla de la necesidad de influir en quienes toman las decisiones políticas, o, actuar directamente para cristalizar *su* Estado. Entonces, se reconceptualiza la relación Fuerzas Armadas – poder político, y en un momento determinado éstas se funden con él. Con las particularidades nacionales de cada caso, eventualmente este poder retornará a manos civiles y los militares se retraerán a sus funciones tradicionales.

El ejercicio de la conducción del Estado dejará, para utilizar un término biológico, una herencia genética que se añadirá a las que se han acumulado durante su existencia institucional. Las experiencias vitales de las fuerzas armadas contribuyen para crear un genotipo que se descompone en tres certezas que subyacen en el discurso y el proceder de los militares sudamericanos: 1) están seguros que los políticos son altamente ineficientes para cumplir con sus responsabilidades frente al Estado y la sociedad; 2) consideran que desde cualquier perspectiva (moral, profesional, logística) las Fuerzas Armadas poseen un valor que supera grandemente al de los políticos; y 3) la primigenia misión militar fue fundar *la patria*, y saben que su principal y más sagrado deber es defenderla contra todo lo que le represente una amenaza existencial. Como es bien conocido, la herencia genética tarda millones de años en mutar, más aún cuando ésta se ha probado de radical necesidad para la subsistencia del organismo. Así, durante los 40 años del punto fijismo en Venezuela, o los 21 años de ejercicio democrático – con las salvedades que exige el término – en Ecuador, que median entre el último ejercicio militar del poder y el siguiente intento articulado de hacerse con él, el mencionado genotipo no ha desaparecido. Para

seguir con el paralelismo biológico, el fenotipo, es la “manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente”(Diccionario de la Lengua Española). Tanto en Venezuela como en Ecuador, el ambiente de corrupción manifiesta vinculada al ejercicio político de los civiles, un sistema de partidos agotado y que no respondían a las necesidades de sus representados, y las ineficiencias del Estado magnificadas por el uso clientelar de sus instituciones, crearon el ambiente para que el citado genotipo militar se haga visible.

Las características concretas de este ambiente en Venezuela se originan en octubre de 1958 cuando los partidos políticos tradicionales (Acción Democrática, Comité Político Electoral Independiente, y Unión Republicana Democrática) acuerdan términos básicos para su participación en la democracia y garantizar el aislamiento militar del ejercicio político. El nombre de la quinta en que se firmó este acuerdo puede tomarse como un aviso de lo que significaría para la política venezolana esta democracia que tenía como punto fijo de su acción el reparto en el manejo del Estado entre AD y COPEI¹². Entre 1958 y 1998, Acción Democrática puso cinco Presidentes¹³ (59 – 64, 64 – 69, 74 – 79, 84 – 89, 89 – 93), de los cuales Carlos Andrés Pérez accedió al ejecutivo por dos ocasiones (1974 y 1989). Por la otra parte, COPEI tuvo oficialmente dos presidentes (Rafael Caldera, 1969 – 1974 y Luis Herrera Campins, 1979 – 1984), aunque Caldera accedió nuevamente a la Presidencia para el periodo 94 – 99, pero en esta ocasión lo hizo con una coalición de disidentes de COPEI, llamada Convergencia. Estos datos sirven únicamente para resaltar la profundidad de la ruptura que se dio con la elección de Chávez y, en términos más estructurales, para reflejar la pobreza del cambio entre los actores políticos del sistema, pues todos habían actuado públicamente y en representación de su partido desde instancias distintas de la administración pública. Los 40 años en que el bipartidismo venezolano fue el único protagonista en las instancias estatales provocaron el “... debilitamiento de las instituciones políticas”(Viciano y Martínez, 2001:27), mismo que se profundizó con la crisis económica iniciada en 1983. A partir de entonces, las deficiencias estatales en la atención de las

¹² Se debe resaltar que URD poco a poco fue perdiendo su protagonismo en el poder. Desde el inicio no existían auspicios favorables para la supervivencia de un tercer partido, pues, uno de los ideólogos de la nueva democracia, Rómulo Betancourt, favorecía el bipartidismo, mismo que fue calando en el sistema y que finalmente se consolidó en 1973.

¹³ Se podrían contar seis presidentes si es que se considera a Ramón J. Velásquez, que sustituyó a Carlos Andrés Pérez el 5 de junio del 93. Sin embargo, a pesar de ser afiliado a AD, mantenía una línea de acción independiente, lo que le garantizó los votos de COPEI para acceder a la Presidencia.

necesidades sociales profundizaron el nivel de tensión entre gobernantes y gobernados. A su vez, la relación clientelar establecida por los partidos como el canal para que el Estado llegue a los ciudadanos se afectó no solo por las imposibilidades materiales impuestas por la crisis, sino también por la profundización de la desconfianza popular en los partidos en vista de los escándalos de corrupción que involucraban a sus líderes. En este ambiente, el 4 de febrero de 1992 el sistema recibe el primer aviso de su agotamiento y cercana extinción.

El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) era una logia militar conformada en 1982 con el fin de estudiar la realidad del Estado, sus problemas y a la luz del pensamiento de Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez y Simón Bolívar, plantear potenciales soluciones a un sistema que comenzaba a demostrar sus falencias. Esta agrupación iniciada por el Tcnel. Hugo Chávez Frías y los capitanes Felipe Acosta Carles y Jesús Urdaneta Hernández, tenía al discurso bolivariano como la piedra angular de su planteamiento, pero éste se había nutrido también de la doctrina izquierdista que penetró al ejército venezolano durante los años 60 como parte de un plan a largo plazo de las organizaciones comunistas (ilegales en ese momento) para lograr que dentro de las filas militares se formen “... oficiales comprometidos política e intelectualmente con la izquierda revolucionaria”(Manrique, 2001:313). Bajo este marco ideológico el MBR-200 comienza a tener reuniones regulares diez años antes del golpe, tiempo en que se llegan a plantear como objetivos de la agrupación: 1) rescatar los valores de la patria, 2) dignificar la carrera militar, y, 3) luchar contra la corrupción..

La crisis *in crescendo* que vivía Venezuela desde 1983, podría considerarse catalizadora de la actuación de Chávez y el MBR-200 en 1992. La brutalidad de la represión ordenada por Carlos Andrés Pérez en 1989, durante la protesta que se conoció como “Caracazo”, en la que además murió Felipe Acosta Carles (en este hecho se juega con la hipótesis del asesinato por ser él uno de los más activos miembros del MBR-200 que ya estaba bajo el escrutinio del gobierno). Samuel Fitch en su trabajo sobre las causas para que los oficiales opten por un golpe de Estado indica que una de ellas es“... el uso de las tropas del ejército para suprimir protestas y desordenes anti – gobierno”(FITCH, 1986:154). Así, en febrero de 1992, Chávez, apoyado por un grupo de oficiales jóvenes, intentó el asalto a la casona

presidencial y al Palacio de Miraflores, incitó al levantamiento a todas las guarniciones del país y esgrimió como justificativo de su acción que:

“Cuando la sociedad pierde la capacidad para la resistencia pacífica... y... se ha apelado a las múltiples maneras de resistencia: huelgas, protestas, denuncias, manifestaciones pacíficas, y violentas, y no ha cambiado nada, se abre el camino para la rebelión” (Viciano y Martínez, 2001:69)¹⁴

A pesar del éxito entre la oficialidad joven y en la mayoría de cuarteles, Chávez no concretó el apoyo civil, de la cúpula militar, ni de los militares destacados en Caracas, a la vez que Pérez logró que la oposición cerrara filas en respaldo del respeto al orden democrático. La prisión de Chávez, no obstante, no significó el fin del MBR-200, sino que más bien implicó que este tuviera tiempo para replantear su acción política y la forma en que pretendía hacerse con la conducción del Estado, un objetivo para el que influyó grandemente el carisma del líder insurrecto¹⁵. Entre 1992 y 1997 el MBR-200 se transforma en el Movimiento V República (MVR), en un proceso en que se nutrió del aporte ideológico y la experiencia logística de pequeñas agrupaciones de izquierda “... que previamente habían sido negadas acceso a los centros de poder” (Sylvia y Danopoulos, 2003:67). El discurso y la propuesta del MVR, como se verá posteriormente, ratificaban su condición de partido anti-sistémico, un activo que le reportó una mejor identificación con la gente, agobiada por las falencias del partidismo tradicional.

El golpe del 21 de enero de 2000 en el Ecuador sigue una trayectoria similar a la venezolana, y en apariencia se conjugaron elementos de la misma índole, produciendo los mismos efectos. De hecho, esta apreciación preliminar proporcionó a Lucio Gutiérrez la base discursiva y el apoyo popular que en el 2002 le garantizó la victoria en las elecciones presidenciales, pues coyunturalmente el escenario de crisis en Ecuador (explosión social, desconfianza en las instituciones del sistema, ineficacia de los partidos como órganos

¹⁴ Para más detalles sobre los pronunciamientos y palabras vertidas por los protagonistas del golpe del 4 de febrero de 1992, ver: ZAGO, Ángela, La rebelión de los Ángeles.

¹⁵ Njaim, Combellas y Álvarez, en su trabajo Opinión Política y Democracia en Venezuela, citado por Viciano y Martínez, señalan que el 64,5% de la población venezolana veía como positiva la imagen del teniente coronel, situándose únicamente por debajo de Uslar Pietri y Rafael Caldera, aunque la tendencia era a que esta percepción positiva suba, como lo demostraron los sondeos posteriores y, principalmente, su éxito electoral.

intermediadores ante el Estado) contenía elementos muy cercanos al venezolano. El golpe como tal es, sin embargo, el elemento que diferencia la experiencia venezolana de la ecuatoriana, pues en la última hay una crítica ideológica de un año o menos, y la organización del golpe, que tomó un mes, estuvo netamente a cargo de la CONAIE, los militares únicamente brindaron su aval.

Los antecedentes políticos del golpe ecuatoriano se encuentran en la crisis política y económica que azotaban al país prácticamente sin descanso desde 1995. La recuperación económica que se evidencia en la región entre 1990 y 1994, al año siguiente comenzó un descenso en picada, y para el específico caso ecuatoriano se convirtió en una crisis de difícil asimilación para las clases más pobres como consecuencia de las reformas estructurales y su alto costo social. La guerra con el Perú en 1995, además, provocó un fuerte desbalance en la precaria estabilidad conseguida, y, casi al final de la administración de Durán Ballén se sumó el costo político del fraccionamiento del gobierno, consecuencia del juicio para conseguir la destitución – por cargos de corrupción– del vicepresidente. Su posterior huida del país, provocó en las elecciones de 1996 “el desplome de la política de partidos” (Thorp, 1998:282) pertenecientes al *establishment* que las FFAA durante la transición habían considerado que eran seguros para el mantenimiento de la democracia¹⁶. En 1996, la elección de Abdalá Bucaram – el *político paria* por su “... carácter periférico al poder establecido y al núcleo duro del poder social y económico dominante” (Bustamante, 2003:3) – como Presidente reflejó el agotamiento de las élites políticas tradicionales, lo que motivó la entrega de los electores a la opción mesiánica del populismo. El breve gobierno que encabezó en un ambiente bufonesco expuso los males del sistema político ecuatoriano, eliminando la opción populista anti – elites del imaginario electoral ecuatoriano. La

¹⁶ Una de las preocupaciones esenciales para las FFAA ecuatorianas desde los años 60 ha sido que actores políticos populistas se encaramen en la presidencia, por lo nociva y peligrosa que puede resultar su participación para la institución castrense, y en términos mayores, para la existencia del Estado. Este pensamiento se evidenció con los repetidos golpes en contra de José María Velasco Ibarra, las maniobras en la ley de elecciones para impedir la elección de Assad Bucaram en 1979 y la advertencia a los electores sobre la estabilidad de la democracia en caso de la victoria de Abdalá Bucaram en 1988. Más en: FITCH, Samuel, *The military Coup d’État as a political process: a general framework and the Ecuadorian case*, en LOWENTHAL, Abraham and FITCH, Samuel, *Armies and Politics in Latin America*, Holmes & Meier, New York, 1986, y en BUSTAMANTE, Fernando, *Los militares y la creación de un nuevo orden democrático en Perú y Ecuador*, Documento de trabajo, Programa FLACSO, Santiago de Chile, Nro. 370, Marzo 1988.

presidencia interina de Fabián Alarcón reflejó nuevamente el estado de invasión de la democracia por un sistema de partidos clientelar que concretó su *selección* a partir de un pacto avalado por los militares, a pesar de su ilegalidad.

La destitución de Bucaram evidenció la existencia de vacíos constitucionales, y psicológicamente, la necesidad de refundar el país. Sin embargo, la Asamblea Constituyente era la representación del sistema tradicional de partidos por lo que la nueva carta fundamental preservó en lo medular el espacio para los vicios seculares de la política ecuatoriana. La nueva Constitución fue el marco en que el gobierno de Jamil Mahuad debió enfrentar varias crisis entre 1998 y 2000. La primera de ellas fue la crisis de identidad nacional provocada por la firma del acuerdo de paz con el Perú. Ella reflejó la exigencia de una redefinición de las necesidades de defensa del país, y el replanteamiento del imaginario de la unidad nacional alrededor de la interculturalidad, la diversidad, la plurinacionalidad y las potencialidades del Ecuador en el sistema internacional¹⁷. Esta primera crisis en realidad, y para usar un *cliché*, fue una oportunidad para que se interioricen y comprendan las ventajas que en todos los aspectos traía una paz duradera. La convergencia de las demás crisis durante 1999 terminó por debilitar al gobierno y ratificar las deficiencias del sistema político ecuatoriano. Tales crisis fueron: una financiera, reflejada por la incapacidad estatal de conseguir un acuerdo con el FMI –a causa del incumplimiento de la condicionalidad que incluía la eliminación de subsidios, y la posterior moratoria en el pago de la deuda externa– lo que a su vez impidió el acceso a nuevos créditos de las IFI's; una crisis monetaria, caracterizada por una inflación de 40%¹⁸ y “... la más grande devaluación monetaria en América Latina (348% entre agosto 1998 y enero 2000, y un 33% adicional en las primeras semanas de 2000)” (Walsh, 2001:175); una crisis bancaria que provocó el cierre y absorción por el Estado de casi todas las instituciones del sistema, con un altísimo costo

¹⁷ Este fue un planteamiento que se hizo inmediatamente tras la firma del acuerdo de paz., en el sentido de que el sistema de educación ecuatoriano deje de enseñar la tesis de la “herida abierta” como el fundamento de la “amarga” historia nacional que concebía al país como la víctima eterna de los ánimos expansionistas peruanos. Esta iniciativa ha alcanzado finalmente un carácter oficial a mediados del año 2004, cuando el Ministerio de Educación aceptó incorporar una cátedra de enseñanza cívica que incorpore estas nuevas concepciones de la unidad nacional y de la historia patria. Ver: AYALA, Enrique, Ecuador, Patria de todos, Manual de Cívica, UASB – Corporación Editora Nacional, Quito, 2004.

¹⁸ Esta inflación de 1999 creció al 91% en el 2000 y hasta cerca del 110% en el 2001, a pesar del cambio de signo monetario al dólar. Estas cifras se han tomado de LARREA, Carlos, Pobreza, Dolarización y Crisis en el Ecuador, Ediciones Abya – Yala, Quito, 2004, y Diario El Comercio, 1 de enero del 2001, p. A9

social no solo por los recursos invertidos en el salvataje, sino también por el congelamiento de los recursos de los ahorristas; una crisis política causada por la imposibilidad del ejecutivo para lograr coaliciones con legisladores que le abrieran un espacio para la gobernabilidad; y, finalmente, una crisis moral¹⁹, causada por la dolosa donación del dueño de uno de los bancos “salvados” a la campaña del Presidente y la cínica aceptación del hecho por este último. La trayectoria de la crisis ecuatoriana entre 1999 y 2000 –y quizás de todo el periodo democrático– se puede resumir en una frase atribuida al mismo Mahuad: “la gente no cree en la prensa... en el sucre... en el sistema bancario... no creen en el Presidente, no creen en nada” (Vallejo, 2000:A4).

En el caos que significa la coexistencia de estos factores, comenzó a consolidarse el cuestionamiento militar al orden existente. A diferencia del golpe venezolano que tuvo a un solo grupo militar con un solo líder visible, en el caso ecuatoriano los hechos y promotores del golpe del 21 de enero todavía son sumamente confusos en cuanto a sus gestores²⁰. Por esta razón, este análisis se centra en el rol que Lucio Gutiérrez cumplió en el mismo. Desde marzo de 1999 Gutiérrez comenzó a cuestionar las acciones presidenciales, resaltando la precaria situación de la tropa y la necesidad de que el Alto Mando “... interviniera más en la conducción del país” (Hernández et al, 2000:32). Los reclamos del coronel a los comandantes de las Fuerzas Armadas se volvieron reiterativos, lo que le valió ganar ascendiente entre la oficialidad joven de la institución y, por otro lado, pasar a “*observación*” en el Comando Conjunto. Eventualmente la dirigencia indígena llegó a conocer de la línea crítica de Gutiérrez y su prestigio en la institución, por lo que en

¹⁹ Si bien la definición de la moralidad y sus límites es una tarea sumamente compleja, con este término se pretende únicamente señalar las limitantes personales que tenía Mahuad para realizar un “buen gobierno”.

²⁰ A partir de atender las principales visiones al respecto, se pueden hablar de tres golpes que en determinado momento se encontraron en la madrugada del 22 de enero. 1) El orquestado por la CONAIE que junto con el Parlamento de los Pueblos, se tomó el Palacio Legislativo, y que contó con el respaldo de los oficiales jóvenes de la ESPE y la Academia de Guerra, comandados por Lucio Gutiérrez y Fausto Cobo, mismo que condujo a la proclamación de la Junta de Salvación Nacional en la mañana del 21 de enero. 2) Este golpe se hizo evidente ese mismo mediodía cuando la cúpula militar explicó a Mahuad que ya no tenía espacio para la rectificación, por lo que debía tomar una decisión (léase renunciar), ante su negativa, a las 15:40 las FFAA anunciaron el retiro de su apoyo al Presidente. 3) Este tercer golpe es más confuso, pues incluyó una negociación entre los generales del Alto Mando militar (que para entonces habían comunicado que tenían el poder) y la Junta de Salvación (popularmente respaldada). Producto de la negociación se incorporó a la Junta al Gral. Carlos Mendoza quien horas más tarde renuncia a la misma y da paso a la sucesión constitucional. Una hipótesis señala que Gustavo Noboa, entonces vicepresidente, planeó el golpe en que actuó la cúpula militar. Ver: WALSH, Catherine, The Ecuadorian political irruption, Uprisings, Coups, Rebellions and Democracy, en Nepantla: Views from South, Volume 2, Issue 1, Duke University Press, 2001

preparación a las movilizaciones que se realizarían en enero, lo invitaron a varias reuniones en las que se comenzó a delinear un plan de gobierno para el movimiento indígena militar que tomaría el poder dentro de poco²¹. Hasta el 20 de enero existía la certeza del apoyo de los generales, pero tras una cita entre Antonio Vargas, líder de la CONAIE, y el general Carlos Mendoza, este se descartó. La organización indígena decidió seguir con el plan que se habían trazado y al día siguiente ocupó el Congreso Nacional, situación de la que estaban al tanto Gutiérrez y un grupo de oficiales de la ESPE, por lo que poco tiempo después estos se hicieron presentes. En poco tiempo, Gutiérrez, Vargas y el ex – presidente de la Corte Suprema de Justicia constituían la Junta de Salvación Nacional, que en primer lugar desconocía los poderes constituidos del Estado, desconocía al Comando Conjunto de las FFAA, y pretendía dirigir un gobierno fundamentado en los principios indios de *ama quilla*, *ama llulla* y *ama shua* (no robar, no mentir y no ser ocioso). El discurso de Gutiérrez tras ser incorporado a la junta de gobierno –mismo que sería repetido con asiduidad durante la campaña del 2002– justificó su presencia allí diciendo “Estamos aquí para derrocar a este ignominioso modelo, para cambiar las estructuras del estado y para fortalecer las instituciones democráticas... estamos aquí para evitar la corrupción e impunidad auspiciadas por el gobierno...”(Walsh, 2001:176). En las horas que siguieron, la Junta se enteró de la salida de Mahuad (propiciada por el Alto Mando militar, no por los integrantes de la Junta que todavía se encontraban en el Congreso), se dirigió al palacio presidencial, negoció con los generales, y durante la madrugada se disolvió. Para Gutiérrez, que durante la negociación en Carondelet cedió su puesto en la Junta al Gral. Mendoza, el 21 de enero le concedió una inmejorable exposición en los medios de comunicación nacionales, aunque su destino inmediato fue la prisión, por ser una de las cabezas visibles del golpe militar.

Para concluir con esta sección, se debe resaltar que la visibilización del fenotipo militar en los dos países no representa originalidad por las circunstancias que llevaron a la acción ni por los planteamientos que se hicieron para explicar los cimientos en que se fundaría el

²¹ Los indígenas interpretaron señales de apoyo a su levantamiento en conversaciones mantenidas con generales, en la colaboración logística para eventos de la CONAIE, y en las críticas que a título personal y en contactos privados, habían oído expresar al Jefe del Comando Conjunto en contra de Mahuad. A partir de creer en el apoyo militar, comenzaron a prepararse y a reunirse con oficiales que expresaban su disconformidad con el sistema, como Gutiérrez o Fausto Cobo.

nuevo estado. Las condicionantes que determinan las reacciones institucionales militares se dieron con meridiana claridad en el caso venezolano y ecuatoriano, y desde esa perspectiva los intentos de golpe eran inminentes e independientes de quienes los encabezaran y de cuáles fueran las circunstancias coyunturales adyacentes al hecho. Las diferencias en ambos procesos, como se dijo antes, tuvieron que ver con la estructura organizativa de cada golpe (una agrupación autónoma nacida del interior de la institución armada que no catalizó alianza alguna con los civiles, frente a un grupo relativamente pequeño de oficiales que avalaron el proyecto de golpe de la organización indígena, y que en lo operativo se hicieron cargo del mismo una vez que la toma del Congreso fue un hecho), y *a posteriori*, con la actuación y objetivos del partido militar – civil.

2. MVR y PSP: ideología e inscripción en el sistema democrático.

Necesidad política y perdón presidencial

Los momentos posteriores a los golpes venezolano y ecuatoriano abrieron un espacio para la profunda reflexión de la sociedad sobre el sistema político, sus ineficiencias y la necesidad de reestructurar las antiguas prácticas políticas a través de un cambio generacional y sistémico que garantice que los vicios de la *vieja política* no se repitan. En Venezuela, la tesis de la necesidad de una reforma constitucional la realizó Jaime Lusinchi en 1984, y creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), misma que entre 1989 y 1992 planteó una serie de modificaciones para la Constitución vigente. A partir del golpe el tema no se volvió a tratar sino hasta 1998, pues el esfuerzo político durante el gobierno de Caldera se enfocó en la aplicación de los correctivos económicos necesarios para solventar la crisis. En Ecuador, la discusión sobre la reforma al Estado se había cerrado con la Asamblea Constituyente del 97, y tras el golpe la principal preocupación política pasaba por apuntalar la dolarización y promover un rápido cierre de las heridas institucionales, fin, este último, que llevó a que en el 2002 las FFAA decidieran construir una política de defensa nacional, siguiendo la experiencia de los *libros blancos* chileno y argentino principalmente²².

²² Un libro blanco es el documento resultante del debate entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas para delinear los elementos de la política nacional de defensa del país. El objeto de estos procesos en países con fuertes rupturas sociedad – institución militar como causa de las dictaduras, es sanar las heridas existentes y crear un espacio de confianza mutua entre ambos. En el caso ecuatoriano, la participación de la sociedad civil

A pesar de la detención de Chávez y Gutiérrez, subsistía una fuerte tensión en los cuarteles, causada por la sensación de injusticia que rodeaba a su encarcelamiento, pues, en la lógica de la democracia protegida, existe “... la noción de que la gente debe ser protegida de... organizaciones que pueden subvertir el orden político y social existente” (Loveman, 1999:213), aún cuando éstas sean los mismos partidos políticos, de manera que, si bien el intento de golpe rompió el orden constitucional existente, un fin superior –la defensa de *la patria*– justificaba el retiro del poder de los corruptos gobernantes. Por otra parte, las ambigüedades constitucionales en la carta magna venezolana de 1961 y la ecuatoriana de 1998, permitieron interpretaciones que de alguna forma garantizaban rupturas como las ocurridas. Así, el artículo 250, invocado por Chávez para justificar el golpe, mencionaba que “... en el caso en que la Norma Fundamental fuera violada, el deber de todo ciudadano, investido o no de autoridad, es colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Para el caso ecuatoriano, la ambigüedad nace del artículo 183, cuando señala que “las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental... la defensa de la integridad y soberanía del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”.

Al limitar el argumento a lo jurídico, estas disposiciones abrían un espacio suficientemente amplio para demandar la libertad de los militares insurrectos. Pero a este debe añadirse la presión política por parte de grupos con alta capacidad de movilización social, y la presión por parte de las mismas Fuerzas Armadas que debían enfrentar la fractura institucional con serios cuestionamientos nacidos en la tropa y en una importante parcialidad de la oficialidad a las acciones políticas post – golpe. En ambos casos, la esencia misma de la misión militar estaba en entredicho, y ello motivaba a presionar por cambios en la decisión sobre las penas de los insurrectos. El temor de posteriores y mayores fracturas en el plano social y militar finalmente obligaron a los presidentes Caldera en 1994 y Noboa, en mayo de 2000 a conceder la amnistía a los insurrectos²³. Los proyectos políticos de los coroneles

fue grande, y la discusión se extendió a varias ciudades, con representantes de distintos espacios sociales, pero el documento final fue únicamente una reedición y compilación del pensamiento y formas de acción militares desde 1979, con pocas innovaciones teóricas, pero con la indiscutible ventaja – para la institución – de que tales espacios fueron legitimados por la sociedad y por lo tanto no podrían ser cuestionados en el futuro cercano. Ver: PÉREZ ENRÍQUEZ, Diego, La construcción del libro blanco de la defensa del Ecuador, (tesis de maestría), Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2003.

²³ Debe tenerse en cuenta que en Venezuela, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que respaldaba a Chávez, durante las elecciones de 1993 apoyo a Convergencia, el movimiento que llevó a Rafael Caldera a la

comenzaron (o recomenzaron) a partir de la resolución legal que les absolvía de los actos relacionados con la intentona golpista. En las líneas siguientes se verá la conformación definitiva del MVR y de PSP, de cara a las elecciones presidenciales, y los planteamientos discursivos realizados en lo referente a la reforma política del Estado, al manejo de la economía, al rol asignado a las FFAA y los básicos planteamientos de política exterior, en especial en la relación con Estados Unidos, mismos que se confrontaran con el camino seguido una vez alcanzada la Presidencia.

La conformación del partido.

Tras el 4 de febrero de 1992 los grupos de izquierda fueron los primeros en expresar su apoyo al carismático teniente coronel Chávez. Si bien las apreciaciones académicas sobre el valor del discurso que pronunció en ese día varían grandemente según la opinión política de cada autor, el hecho es que este caló en los sectores populares por su sencillez, pues, como señala Luis Gómez Calcaño en *Crisis de legitimidad e inestabilidad política en Venezuela*, “... la identificación de la sociedad con el proyecto político de los insurrectos no se debía propiamente a éste –que era totalmente desconocido– como a la imagen carismática de Chávez” (Viciano y Martínez, 2001:75). A partir de esta gran capacidad de convocatoria popular por parte de su líder, el MBR-200 comienza su mutación hacia el MVR, nombre escogido porque aparte de la similitud fonética con el de la logia militar explicaba el objetivo principal de la agrupación: la fundación de una nueva república, la quinta república. La izquierda fue un actor fundamental en este proceso de mutación, que termina por convertir al MVR en “... una maquinaria electoral, que si bien es endeble ideológicamente por su carácter neonato- se ha hecho altamente efectiva”(Romero, 2002:6). Tal efectividad tiene su base, ya se dijo, en el carisma de Chávez, cuyo discurso y básico lineamiento ideológico abrieron una ventana de negociación con los partidos de izquierda. Si bien estos pertenecían a ese *establishment* al que Chávez denunciaba – especialmente el MAS que había tenido una importante cuota de poder durante el gobierno de Caldera–, le podían “proporcionar al líder y a su movimiento una tradición de

presidencia. A partir de esta mayor capacidad de influencia, sumada a los rumores de nuevas insurrecciones castrenses, el MAS consiguió que Caldera concediera el indulto a Chávez. En Ecuador, la inestabilidad que podía generar el movimiento indígena y los temores de que un nuevo estado de bloqueo político trabajaran en contra del único proyecto de gobierno (apuntalar la dolarización) jugó también a favor de Gutiérrez, cuya amnistía se solicitó en abril.

pensamiento y de organización muy superiores a lo que fue la confusa, contradictoria y hasta ingenua ideología original del MBR-200”(Gómez Calcaño y Patruyo, 1999:11). A cambio, estos partidos mantenían una cuota de poder en la administración pública²⁴, misma que ha disminuido con el tiempo por causa de desavenencias entre los socios de lo que en las elecciones se llegó a conocer como el *Polo Patriótico*. Por el carácter coyuntural en que se dieron, estas alianzas han sido débiles, pero de alguna manera Chávez ha logrado mantener su vinculación con la izquierda, a pesar de que ésta se ha fraccionado (o quizás justamente por ello) entre *chavistas* –tal es el caso de Rangel– y quienes encuentran irreconciliables las acciones gubernamentales con los postulados de la izquierda –como Teodoro Petkoff, fundador del MAS, que se separó de él cuando se decidió la alianza electoral con el MVR. De esta síntesis, se pueden discurrir las siguientes características para el partido de gobierno venezolano: 1) tiene un carácter altamente personalista que centra la mayor parte de su capital político en el carisma de su líder, 2) desde el discurso –sus acciones se estudiarán después– es antipolítico por definición, pues su mismo nombre llama al desecho de la *vieja política*, enquistada en la IV república, 3) tiene un débil fundamento ideológico que en cierta forma se ha compensado y refinado gracias a sus alianzas con la izquierda, 4) la práctica del partido en el poder lleva a que las alianzas sean volátiles, provocando divisiones en sus aliados, lo que –si el aforismo es cierto– puede constituirse en una ventaja para su proyecto de largo plazo.

La formación de la Sociedad Patriótica 21 de Enero comenzó una vez que se concedió la amnistía a los insurrectos, y en el mismo estilo que el MVR, oficiales separados de la institución por su involucramiento en el golpe, y familiares cercanos a Gutiérrez (hermanos y cuñados, varios de ellos también militares participantes del golpe), se unieron a esta agrupación. La consolidación de la alianza con Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, le garantizó votos en los sectores marginales. A partir de entonces la imagen que construyó para la campaña fue la de “... Gutiérrez en uniforme de combate y en medio de una marea de ponchos rojos, levantando su mano con los líderes indios”(Quito, 2004:5), reminisciente de aquella vista con los mismos actores en el 2000. La fortaleza de la

²⁴ El caso de José Vicente Rangel es el más evidente y duradero de este acuerdo, pues en primera instancia fue Ministro de Relaciones Exteriores, y en la actualidad cumple funciones como Vicepresidente de la República.

asociación mental producida por esta estrategia comunicacional llegó profundamente a quienes consideraban al gobierno de Mahuad como uno de los más corruptos e ineficientes del periodo democrático. Tal asociación operaba dentro de la siguiente lógica: si quienes derrocaron al presidente corrupto en el 2000 nuevamente actuaban en conjunto con un proyecto de largo plazo, con toda seguridad podrían terminar con el legado no solo del nefasto presidente, sino de todo el sistema inaugurado en 1979 (dolarización, corrupción en la administración pública, la perversa relación asimétrica con Estados Unidos, etc.).

Un activo del que se valieron los estrategas de la campaña del PSP fue articular un discurso “de tendencia nacionalista, progresista, humanista, justicialista, revolucionario” (Lucas, 2003:2), similar al utilizado por Chávez. Así, la imagen descrita se fortaleció a través de alusiones a:

“...la necesidad de forjar una ‘segunda independencia’, de pelear contra el ‘neocolonialismo estadounidense’... (de actuar regionalmente) apuntalando gobiernos como el de Chávez... (de evitar) perder nuestra soberanía monetaria... (de) refundar al Ecuador, cimentándolo en valores éticos, morales, cívicos y sobre todo con justicia social, recuperando nuestra soberanía mancillada” (Ídem)

Con una campaña montada sobre estas características comunicacionales e ideológicas (que además tenían la virtud de convocar a las organizaciones de izquierda y sindicatos), el voto para Gutiérrez subió sorpresivamente hasta franquearle el paso a la segunda vuelta electoral. Durante ella, alternó el safari verde con ternos de corte sobrio, y moderó relativamente su discurso anti – imperialista, hechos que dan cuenta de su necesidad de consolidar la votación de la clase media. Sin embargo, los puntos centrales de su plan de gobierno se mantenían como durante la primera vuelta, esto es: profunda reforma del sistema político y lucha “*a muerte*” contra la corrupción; necesidades igualmente reclamadas por el electorado, independientemente de su extracción socio – económica. Por otra parte, la división del partidismo tradicional en cuanto al apoyo que se brindaría a la candidatura del empresario Álvaro Noboa proporcionó al coronel una ventaja adicional, fortalecida por el sustento electoral obtenido del Partido Roldosista Ecuatoriano,

agrupación del ex – presidente Bucaram de quien Gutiérrez fuera edecán²⁵. En este ambiente el coronel capitalizó los votos necesarios para llegar a la presidencia. Sobre su elección cabe reflexionar que en ella no operó la lógica que prevaleció con la elección del líder del PRE en 1996: “o nos hundimos o nos salvamos”, sino una verdadera esperanza fundada en quienes alcanzaron el status de héroes populares que podrían continuar con el proyecto de Estado que habían iniciado el 21 de enero del 2000.

La reforma política del Estado

Ante la necesidad de reformar las estructuras estatales, Chávez recalcó constantemente a lo largo de su campaña la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que le permitiera establecer una nueva relación entre sociedad y Estado. El objeto era marcar un punto de quiebre entre lo que había sido Venezuela antes de su gobierno y la que sería después de él. Como ya se señaló, esta propuesta no era nueva para el ambiente político venezolano, pero su radicalismo sí lo era, pues se planteaba otorgar poderes plenos a la Asamblea. La posesión de Chávez refleja no solo su histrionismo, sino su decisión de comenzar a implementar los cambios necesarios *ipso facto*, pues aceptó el cargo jurando sobre una “moribunda Constitución”, y anunciando la emisión de un decreto que llame “... al pueblo a pronunciarse sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente” (Gómez y Patruyo, 1999:19). A continuación sucedieron una serie de tensiones entre el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la oposición, producto de las que se limitaron los poderes de la Asamblea²⁶ aunque se preservó la noción de que ésta debía “... transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una

²⁵ Este partido tenía una fuerte presencia en los sectores marginales de la costa, aunque este nicho se ha minado sensiblemente desde la aparición en escena de Álvaro Noboa quien busca fortalecer a su partido justamente ante este segmento del electorado. Existió ironía o premonición en cuanto a la aceptación de este apoyo, pues Gutiérrez había declarado que como edecán de Bucaram le produjo profunda repulsión ver la huida de este de Palacio, llenando sacos de dinero del Estado, pero ya en su gobierno el PRE ha sido una de las fichas con que ha jugado para garantizarse cierta estabilidad en el poder.

²⁶ Sobre los detalles de la discusión previa a la convocatoria para la Asamblea Constituyente y el proceso mismo de redacción de la nueva constitución se puede consultar: VICIANO, Roberto y MARTINEZ, Rubén, Cambio político y proceso constituyente en Venezuela (1998 – 2001), Vadell Hermanos Editores C.A., Caracas, 2001; GÓMEZ CALCAÑO, Luis y PATRUYO, Thanali, Venezuela: entre la esperanza popular y la crisis económica, Sala de Lectura CLACSO, 1999, www.clacso.org; ROMERO JIMÉNEZ, Juan, La nueva dinámica de poder en Venezuela: el MVR, Hugo Chávez y el proceso constituyente (1999), Laboratorio de Investigación Transdisciplinario del Espacio Público (LITEP). La Universidad del Zulia-Venezuela, http://clio.rediris.es/articulos/poder_venezuela.htm

democracia social y participativa”²⁷. Siguiendo la dinámica de las elecciones de 1998, el MVR arrasó tanto en la convocatoria (92,36% a favor de que se conforme una Asamblea Constituyente), en la elección de los miembros de la Asamblea (de 133 escaños, solo 6 pertenecían a la oposición), en el referéndum confirmatorio de la nueva constitución y en el referéndum confirmatorio de los representantes elegidos. En los 180 días que siguieron a la elección de la Asamblea se preparó una nueva constitución que recoge algunas de las propuestas de reforma preparadas por el COPRE, que permite que “buena parte” de los artículos de la constitución de 1961 renazcan “entre los artículos de su sucesora”(Viciano y Martínez, 2001:174), e implementa, principalmente, mecanismos de participación ciudadana a través del referéndum, del mandato revocatorio, de la rendición de cuentas obligatoria de los representantes, y la iniciativa legislativa popular. También se pasó a un legislativo unicameral, se ha “reorganizado el Poder Judicial, y ordenado la revocación de los mandatos de los dirigentes sindicales, confirmándose la mayoría de esas medidas en exitosos referendos populares” (Martínez, 2002:134). Todos estos procesos han implicado una profunda tensión política para el gobierno, que ha visto como la sociedad se polariza frente a cada iniciativa, sea que nazca del Presidente (por ejemplo la sustitución de la gerencia de PDVSA en el 2002, que un paro de casi dos meses obligó a que Chávez rectificara) o de la oposición (en agosto del 2004 la convocatoria y realización del referéndum revocatorio del mandato de Chávez, que lo ganó con casi el 60% de los votos)

La expectativa generada por la campaña de Lucio Gutiérrez hacía pensar en profundas reformas a la estructura del Estado, similares a las venezolanas. Tras su acceso a la segunda vuelta anunció su intención de promover una reducción del Congreso Nacional de 100 a 28 diputados, despolitizar a la Corte Suprema de Justicia y “... refundar un Ecuador cimentado en valores éticos, morales y cívicos”(www.sociedadpatriotica.com). Las esperanzas nacidas de la alianza PSP – Pachakutik tuvieron que enfrentar cuatro barreras operativas – ordenadas de la menos grave a la más grave, valoradas únicamente en cuanto a la incidencia que tienen sobre la consecución de objetivos– que, de haberse superado, permitirían la implementación de los cambios propuestos. La primera, es que el “... Ecuador

²⁷ Esta es una parte del texto completo de la primera pregunta del referéndum. Tomada de: Base De Datos Políticos de las Américas, Venezuela Referendum Results: April 26, 1999, www.georgetown.edu/pdba

es, en la práctica, un país extremadamente racista”(Walsh, 2001:196) y aunque el apoyo a la alianza indígenas – ex militares funcionó durante la campaña entre los grupos que proporcionan la mayoría de los votos (n.s.e. medio bajo y bajo), en aquellos que detentan un mayor poder de presión política y económica la noción de “*tener que ser gobernados por los indios*” tuvo un efecto alienante que demandaba un elevado uso de recursos políticos y de negociación para morigerar. La segunda barrera se configura ante el pequeño grupo de diputados que el PSP tiene en el Congreso (6 diputados), una situación que mientras duró la alianza con Pachakutik (10 diputados) se balanceaba ligeramente. Pero aún contando con esos votos la posición del PSP era (y es) débil, por lo que un mayor apoyo a sus proyectos necesariamente demandaba de un acuerdo con el *establishment* político del país²⁸. A esta debilidad relativa se suma una falta de decisión y capacidad de negociación gubernamental para imponer una agenda de discusión a las élites políticas. Este tercer obstáculo deja en claro que desde el inicio la estrategia ha sido escuchar lo que los demás políticos tienen que proponer y negociar a partir de ese punto, perdiendo la capacidad de iniciativa. Ejemplo de ello es que el 20 de febrero de 2003 (algo más de un mes después de asumir el mandato), Gutiérrez se citó con el líder tradicional del PSC, León Febrés Cordero, con quien aparentemente concretó el aval legislativo de su bancada a cambio de que Gutiérrez mantenga la ortodoxia del manejo económico y mesura (o inmovilismo) en la promoción de reformas al Estado. Este hecho lleva al siguiente y mayor obstáculo para que Gutiérrez implemente reformas dramáticas al sistema: Gutiérrez no cree en el plan de gobierno con el que llegó a Carondelet, ya sea porque este se diseñó considerando solo aspectos de marketing político antes que la ideología del aspirante a gobernante o las necesidades reales del país, o, porque en su propuesta se incorporaron elementos que responden más bien a una concepción de Estado del otro socio de la alianza. El hecho es que la falta de claridad o de decisión en cuanto al cambio que quiere lograr para la

²⁸ Además, esta participación pequeña de PSP en el legislativo cuestiona la hipótesis de que la victoria de Gutiérrez significó el fin del partidismo tradicional en el Ecuador. El Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática son partidos del *establishment* que en la elección legislativa obtuvieron 26 y 15 escaños, respectivamente. Además, la gestión de sus administraciones locales les asegura un importante espacio de poder especialmente en Guayas y Pichincha, las provincias más grandes del país. En las próximas elecciones seccionales, mientras tanto, el PSP se arriesga a su extinción debido a la disposición del TSE que refiere a la necesidad de que durante dos elecciones nacionales los partidos logren una votación mínima del 5% del padrón electoral para mantenerse activos. Los partidos mencionados, además del PRE y el PRIAN cuentan con altas probabilidades de victoria, especialmente en aquellos lugares donde buscan la reelección.

estructura del Estado, ha impedido que ésta pase de ser una propuesta, y que las capacidades gubernamentales para generar confianza disminuyan progresivamente.

Política Económica

Venezuela es un Estado cuyo funcionamiento depende grandemente de los ingresos petroleros, mismos que moldearon su sistema político durante los 40 años de Punto Fijo y que en gran medida han servido para marcar el camino a la administración de Chávez. El tamaño del Estado y su penetración en la sociedad demanda un manejo económico conservador, en el sentido de que cambios demasiado radicales pueden provocar profundos trastornos sociales. Este compromiso con la ortodoxia es mucho más importante al considerar que “la base social del gobierno de Chávez son los marginados trabajadores de la economía informal, que carecen de seguridad social, de los beneficios de la legislación laboral, de beneficios de cesantía y de interlocutores nacionales”(Ellner, 2004:25). Así, independientemente de que se considere altruista o meramente utilitaria, la preservación del sistema clientelar en el gobierno de Chávez garantiza un espacio de maniobra política que ha mantenido a Chávez en el poder, a pesar del golpe del 11 de abril del 2002, del referéndum revocatorio del 2004 y de la permanente polarización política del país. El clientelismo usado ahora por el Estado, difiere del *puntofijista* en que el proveedor de favores ya no es el partido, sino la persona, Hugo Chávez. El mayor gasto gubernamental (en ascenso del 24% al 34% del PIB desde 1999) se refleja en una serie de programas sociales²⁹ financiados básicamente “... con los ingresos adicionales que este país petrolero esta recibiendo a consecuencia del alza en los precios del crudo”(Luhnow y de Córdoba, 2004). El apoyo social capitalizado en estos programas permite al gobierno ejecutar una política económica menos revolucionaria en las áreas del manejo petrolero, inversión extranjera, privatización, devaluación, pago de deuda o reforma agraria. En cuanto al manejo del hidrocarburo, se ha enfatizado en el papel rector de la Presidencia a través del ministerio correspondiente, en detrimento del rol de PDVSA, y en un respeto a las cuotas impuestas por la OPEP. En el área de inversión extranjera, la mayor preocupación de los

²⁹ Entre otros, estos programas son: Barrio Adentro (asistencia medica con el apoyo de médicos cubanos), Mercal (mercados de alimentos solidarios, con productos subvencionados por el gobierno), Misión Robinson, Rivas y Sucre (misiones educativas para culminar estudios primarios, secundarios e introductorios a la universidad). Parte del ascenso en el gasto gubernamental también responde a un incremento del 20% en los salarios de profesores y burócratas en 1999.

inversionistas desde su acceso al poder ha sido justamente la garantía que un gobierno de izquierda y discurso nacionalista podía ofrecerles. No obstante, Chávez ha asegurado el respeto a una ley de 1996 que garantiza los activos de las compañías contra confiscaciones por parte del Estado. Por otra parte, mientras él se ha constituido en un ejemplo ante los anti – privatizadores latinoamericanos, “... el Chávez pragmático esta privatizando muchas de las actividades de la industria estatal” (Sylvia y Danopoulos, 2003:69), principalmente las relacionadas con la extracción y procesamiento de crudo. La presión económica internacional hizo que el Bolívar se devalúe en 30% en el 2002, mientras que por otra parte el gobierno de Chávez ha aceptado mantenerse al día en los pagos de deuda externa. Quizás la mayor reforma que ha logrado concretar Chávez en lo económico ha sido una política de “úsalo o piérdelo” para tierras de más de 5000 hectáreas que no son productivas con el fin de que estas sean vendidas o “... confiscadas por los impuestos adeudados, de manera que estas puedan ser entregadas para siembras de subsistencia” (Ídem). Como se puede apreciar, la retórica de Chávez en el tema económico es mucho más fuerte que sus acciones, inscritas grandemente en las premisas que se mantuvieron durante el *punto fijismo*, aunque los programas sociales han generado la sensación de que “el petróleo esta llegando a las masas”, según la visión de uno de sus beneficiarios³⁰.

La dirección de la política económica *gutierrista* fue evidente desde el momento del nombramiento de su ministro de economía. Este cargo no fue para el economista crítico del consenso de Washington, de quien se había hablado durante el 21 de enero del 2000, sino para Mauricio Pozo, un economista irrestrictamente alineado con las políticas de las IFI's. Con este nombramiento, aparte de evidenciarse la ruptura del discurso entre campaña y gobierno, las posiciones de la coalición que ganó la elección empezaron trayectorias distintas que llevaron a la ruptura definitiva el 6 de agosto del 2003. La carencia de un proyecto propio hizo que el gobierno mantuviera el mismo lineamiento y afán principal que su antecesor: la consolidación de la dolarización en el marco de la implementación de reformas estructurales, al mismo estilo de los últimos 25 años. Sostener la dolarización demanda de extrema estabilidad fiscal cuando no existe un flujo regular de dólares, mismos

³⁰ Ver: LUHNOW, David y DE CORDOBA, José, El populismo económico es el otro vencedor del referendo venezolano, en Diario EL COMERCIO, Miércoles 18 de agosto de 2004, Pág. B3

que entran al sistema como producto de las exportaciones, de las inversiones o de los créditos internacionales. Tal situación implica esforzarse por evitar un presupuesto deficitario (*ergo*, priorizar el gasto) y promover políticas que generen ingresos. La deuda externa juega en este escenario un papel protagónico, pues la mejor forma de garantizarse un flujo constante y rápido de divisas es por vía del endeudamiento externo que a su vez es garantizado únicamente a través del cumplimiento del proyecto de reformas estructurales neoliberales y del pago del servicio de deuda externa. Ante este ambiente Gutiérrez optó por seguir la tendencia dominante en los últimos 25 años, reduciendo el gasto social³¹, disminuyendo subsidios (elevación en los precios de la gasolina), concretando un acuerdo con el FMI –todo esto durante el primer mes de su administración– y manteniendo el servicio de la deuda externa en los niveles tradicionales (alrededor del 40% del presupuesto general del estado). El otro pilar de la política económica ecuatoriana, esto es la generación de ingresos, fue la gestión de créditos externos, en la tónica ya descrita, y la promoción de dos proyectos “*nacionales*” de dudoso éxito. Uno de ellos fue la realización de un certamen internacional de belleza en Quito para el que se invirtieron importantes sumas de dinero y del que se esperaba como resultado un sensible crecimiento en el ingreso de turistas al país en vista de la publicidad realizada durante el mismo. La carencia de una oferta consistente de turismo (fue en este mismo gobierno que se redujo el presupuesto para la promoción turística internacional) y de una infraestructura competitiva – especialmente fuera de las principales ciudades– inciden en el crecimiento del número de visitantes, por lo que hasta el momento este proyecto es deficitario en la consecución de los objetivos planteados. El segundo gran proyecto del gobierno es una apuesta a la incorporación agresiva al mercado estadounidense a través de la suscripción de un Tratado de Libre Comercio, un proceso que a la par del avance de las negociaciones concita una mayor movilización social en contra. A más de los motivos ideológicos que indiscutiblemente existen atrás de esta oposición, existen razones técnicas para considerar que los beneficios de este TLC estarán opacados por el altísimo costo social que trae consigo³². En última

³¹ Ver: LARREA, Carlos, Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador, Abya – Yala, Quito, 2004, y ACOSTA, Alberto, Ecuador: Deuda externa y migración, una relación incestuosa, biblioteca virtual CLACSO, 2002, www.clacso.org

³² Como señala Rafael Correa, “En una economía liberalizada, tipo de cambio fijo y baja competitividad, se deteriora el sector externo” (La convertibilidad argentina y la dolarización ecuatoriana, FLACSO, 2003), reduciéndose así la posibilidad de poner productos ecuatorianos a precios interesantes en el mercado

instancia, el TLC profundizara los desequilibrios en la balanza comercial, pues el tamaño del incremento de las exportaciones no tiene relación con el de las importaciones. Finalmente, los altos precios del petróleo han evitado el incremento de la tensión social, pues han permitido el ingreso de divisas utilizadas en el cumplimiento más o menos puntual del gasto corriente y han servido para subsidiar reducciones en las tarifas eléctricas y de las llamadas internacionales. Sin embargo, la politización en el manejo de la empresa estatal de petróleo ha resultado en una caída drástica de la producción, por lo que estos altos precios no se han podido aprovechar más eficientemente. Ante este panorama, puede entenderse la precaria situación de la economía, que a su vez incide en la volatilidad del escenario político.

Rol asignado a las FFAA

La situación de control civil objetivo –con las limitaciones de esta categorización, como se señaló antes– de las Fuerzas Armadas Venezolanas se mantiene prácticamente inalterable hasta la actualidad, aunque el cambio constitucional por el que ha pasado el país puede llevar a que se altere el tipo de control ejercido. El rol que constitucionalmente tiene la Fuerza Armada Nacional, como se la llama ahora, se debate entre una mayor vinculación de la institución con la ciudadanía, y un amplio espacio de ingerencia política por parte del presidente. Por ello el rol militar en el nuevo gobierno (y estado) venezolano tiene que abordarse desde la dinámica del carácter inmanente que tienen las FFAA de la región y de las particularidades que les ha asignado la nueva carta magna.

Se ha citado la misión protectora de la democracia que tienen los ejércitos latinoamericanos, misma que puede permanecer silente durante largos periodos pero que bajo condiciones políticas determinadas se vuelve a presentar. En Venezuela, esta actitud aislada del muñequero político durante la vigencia del pacto de Punto Fijo tuvo un precio específico: los políticos se comprometieron a asegurarle a los militares gran autonomía en sus procesos de decisión internos (presupuesto, política de defensa, doctrina y educación), les garantizaron financiamiento y carreras militares en condiciones para nada comparables

estadounidense, posibilidad que se reduce aún más si se considera que Colombia y Perú también van camino a un TLC, y estos países con una industria más desarrollada y capaces de dirigir su política monetaria (devaluación) compiten en condiciones mucho mejores que Ecuador.

con las otras instituciones de la región, y aseguraron su fuero y misiones, todo esto con dos salvedades, 1) el presidente era quien decidía el ascenso de los oficiales superiores, y 2) la institución no podía tomar participación activa en política. Bajo el gobierno de Chávez se ha mantenido el mismo esquema de funcionamiento de la institución, pues se siguen garantizando estas ventajas a los oficiales; el presidente mantiene la capacidad de decidir los ascensos, pero, con la nueva constitución lo hace a partir del grado de coronel. La autonomía militar se ha mantenido en los aspectos señalados, aunque la creación de la Contraloría General de la Fuerza Armada crea un espacio de control distinto al que existía cuando el congreso era el encargado de cumplir esta función. En todos los puntos tratados se puede apreciar como se mantiene el esquema básico de espacios militares indiscutidos por los civiles, no solo en Venezuela, sino en la región.

Los cambios más importantes que ha sufrido la institución castrense a partir de la reforma constitucional tienen que ver con su mayor vinculación al concepto de ciudadanía activa. Dos hechos son significativos en esta óptica, la incorporación de "... la participación activa en el desarrollo nacional" (Art.328) dentro de las misiones de defensa, y, el artículo 330 que otorga el derecho al sufragio para militares en servicio activo. A pesar de las preocupaciones generadas inicialmente por estos nuevos espacios de intervención militar, aparentemente se ha mantenido un bajo perfil de actuación política, pues a pesar del conflictivo clima político, no ha existido ningún pronunciamiento desde los cuarteles (exceptuando el de unos cuantos generales y almirantes durante las jornadas previas al 11 de abril del 2002, pero que no incidieron en la cohesión institucional). El voto militar es un tema delicado cuando las instituciones marciales no han alcanzado un nivel de profesionalismo que les permita tomar este derecho ciudadano a título personal y no transmitirlo dentro de las barracas, por otra parte, permite disminuir la brecha de participación ciudadana entre civiles y militares, aunque la exigencia de rendimiento de cuentas de los últimos ante el político elegido puede ser mucho más desestabilizadora de la democracia, de lo que sería el mismo pedido por los civiles. En lo relativo a la participación militar en misiones de desarrollo (como lo fue el programa Bolívar 2000, o el apoyo logístico para Barrio Adentro), las consideraciones nuevamente son ambivalentes, pues la capacidad logística y de personal que tienen los institutos armados puede ser aprovechada

en tiempos de paz para colaborar con los sectores marginales de la sociedad, pero, una estrecha vinculación de este tipo a la vez que incrementa el apoyo popular a la fuerza armada, crea una relación clientelar, de la que los militares eventualmente pueden reclamar el pago a sus favores a través del apoyo a un rompimiento constitucional. Finalmente, una acción del gobierno de Chávez que puede generar tensiones en el ámbito marcial es la incorporación de oficiales en servicio activo a puestos burocráticos dentro de la administración pública. Las diferencias en actividades y sueldos denotan politización (la asignación a un cargo de este tipo puede darse como pago por el apoyo recibido, o como compromiso de posterior apoyo por las tropas a su mando cuando este oficial retorne al cuartel) y pueden llevar a demandas por iguales oportunidades entre quienes no han accedido a este *beneficio*. Así, no se han evidenciado cambios a las estructuras seculares de la institución militar, pero se han incorporado espacios de actuación que si bien al momento se mantienen bajo absoluto control presidencial, incrementan el riesgo de un fraccionamiento, con las consecuencias que esto tendría para el orden democrático.

En el Ecuador, las Fuerzas Armadas han preservado su tradicional autonomía, sus programas de apoyo al desarrollo y la “*protección*” de la democracia, llamando al orden a la sociedad cuando amenaza el conservador orden constituido. Ninguno de estos espacios de acción tradicionales de los militares ecuatorianos ha sido cuestionado por el gobierno del presidente Gutiérrez. Las tensiones con sus ex – compañeros han surgido, a manera de karma, como consecuencia de sus acciones en el 2000, de las expectativas generadas en la baja oficialidad y la tropa por su acceso a la presidencia y del mantenimiento del programa económico de su antecesor. En este ambiente y con la experiencia de haber presenciado dos golpes de Estado (como observador con Bucaram y como actor con Mahuad), el coronel inició su mandato “*curando en salud*” su relación con las Fuerzas Armadas: durante “... las primeras 72 horas de Gobierno... el presidente Lucio Gutiérrez redujo el Consejo de Generales y Almirantes de 46 a 29 militares”(El Comercio, 22/04/04:A6), con lo que acercó su promoción a los puestos de comando, asegurándose una cúpula leal. El último cambio en la Jefatura del Comando Conjunto confirmaría esta hipótesis, pues la cúpula de la marina, que “... es considerada cercana al presidente”(El Comercio, 04/08/04:A6), accedió al mando de la institución por tener los oficiales más antiguos, y podría permanecer

en el comando militar durante los próximos dos años, básicamente el tiempo que le resta constitucionalmente al gobierno del PSP. Las secuelas del 21 de enero son aún visibles en la institución, ante el fraccionamiento interno y con miras a preservar la cohesión, el 11 de julio el Consejo de Generales negó el pedido presidencial de perdón a 461 efectivos (la mayoría de baja graduación) involucrados en el intento de golpe. Ante los rumores de falta de apoyo a la gestión del presidente, el 12 de julio el ejército montó un acto en el cual le juraron lealtad. Este no fue un acto aislado, pues la corporación militar ante cualquier rumor relacionado con su falta de apoyo al presidente ha buscado resaltar su unidad y subordinación al orden democrático. Otro ejemplo de ello es el comunicado publicado el 14 de abril del 2004 y firmado por los comandantes de las ramas, el jefe del comando conjunto y el ministro de defensa, en el que "... ante los rumores tendenciosos y arbitrarios, reiteran al país, la absoluta cohesión existente entre todos sus miembros, el respaldo a la institucionalidad del país y a las autoridades legalmente constituidas"(El Comercio, 14/04/04:A7), una declaración que en condiciones de verdadera tranquilidad y subordinación al poder constitucional no era necesaria. Los antecedentes de este comunicado fueron la demanda de un incremento salarial por parte de la tropa y solicitudes de renuncia que vinieron de sectores sociales y de oposición. Dos reuniones secretas del presidente con los mandos de las fuerzas armadas arrojaron el comunicado citado. A pesar de la promulgada estabilidad fiscal, el incremento en los salarios se concretó, un hecho que lleva a pensar que las FFAA no se relacionan con el presidente de manera muy distinta a la habitual en los últimos 25 años, aunque este busque mayor cercanía con los mandos y favorezca a miembros de la institución con puestos en la administración pública (en marzo sumaban 111 uniformados en servicio activo, mismos que aparentemente se mantienen, exceptuando el ex – gerente de Pacifictel que se encuentra prófugo por una acusación de corrupción). Debe tenerse en cuenta que los objetivos políticos castrenses a largo plazo – esto es la protección de la democracia – "... impiden que ésta se someta a actividades o alianzas que puedan dañar su capacidad y credibilidad"(Pérez Enríquez, 2004:13). Así, la tónica de las relaciones políticas – militares en el Ecuador se han desarrollado en un ambiente de deterioro de la institucionalidad militar que busca ser preservado por encima de toda coyuntura, mientras que por parte del gobierno, los intentos de aprovechar ese deterioro han llegado únicamente a la consecución de una cúpula relativamente leal. La

palabra “relativamente” denota el hecho que esta cúpula no pondrá en juego la única fuente de estabilidad del país (es decir, la estabilidad de la institución castrense, considerada por sus miembros como la columna vertebral de la nación) por una situación meramente coyuntural (un gobierno que a pesar de ser dirigido por un ex – militar, es *civil* en su forma de conducirse), pero, también evitara un nuevo rompimiento del orden constitucional justamente por las comprobadas consecuencias que este tipo de acciones tienen en la salud marcial, y por lo tanto en la salud de *la patria*.

Política exterior.

Chávez utilizó la imagen de la “segunda independencia” para significar el estilo que adoptaría en cuanto a política exterior. Esta independencia debía ser arrebatada al neoliberalismo, a sus políticas, y al país símbolo de esta tendencia, los Estados Unidos. Así, la relación entre este último y Venezuela ha sido causa (una más) de tensiones internas y de tensiones en el ámbito internacional. La retórica del coronel venezolano no es la que en realidad da origen a la difícil relación entre estos dos estados, sino, la búsqueda de la satisfacción de sus intereses. Los años de Punto Fijo fueron de simbiosis casi perfecta entre ambos estados, pues el productor estaba dispuesto a desconocer los límites de producción de la OPEP mientras que Estados Unidos no desaprovechaba la oportunidad de comprar crudo a un precio menor. El ascenso de Chávez hizo que “... Venezuela [fuera] más allá de la adhesión a la política de la OPEP, proveyendo liderazgo y organización”(Sylvia y Danopoulos, 2003:70), fortaleciendo y resignificando el poder de esta organización en los mercados internacionales. El ambiente político mundial a partir del 11 de septiembre del 2001 ha permitido un constante incremento en los precios del hidrocarburo, y ante las condiciones de alta inestabilidad en el medio oriente estos se mantendrán elevados en el futuro. La posibilidad de negociar con este producto de suma necesidad en Estados Unidos le ha permitido a Chávez mantener su discurso “independentista” sin mayor afectación – en el plano internacional– que las constantes admoniciones de las autoridades de la potencia, mismas que inflaman aún más su retórica³³. La teoría realista de las relaciones

³³ No obstante, esta relación no es tan simple y descomplicada. Durante el golpe del 11 de abril de 2002 se acusó al gobierno norteamericano de financiar a la oposición, y, a través de una declaración del Secretario de Estado, Colin Powell, se evidenció el apoyo al nuevo gobierno, a pesar de su inconstitucionalidad. La estrategia de ser un “*pain in the ass*” para el gobierno estadounidense funciona eficientemente para Chávez

internacionales habla de la existencia de una *raison d'état*³⁴ que se sitúa por encima de la acción discursiva gubernamental. La cercanía de Chávez al dictador cubano, Fidel Castro, ha generado una relación en la que se intercambia alivio energético por alivio político. Mientras Venezuela vende petróleo con precios preferenciales a Cuba –a pesar del bloqueo estadounidense– la isla entrega importantes contingentes de médicos, educadores y entrenadores para los programas sociales dirigidos por Chávez, mismos que le aseguran altos niveles de popularidad entre la población marginal. En esta óptica, el beneficio para el Estado sobrepasa las afinidades ideológicas que pudieran existir entre los líderes, aunque desde lo discursivo esta cercanía también empuja a que Estados Unidos maneje las relaciones venezolano – americanas dentro de umbrales de tolerancia flexibles con el fin de evitar una *cubanización* de Venezuela, que implicaría graves pérdidas para los inversores norteamericanos. Por otra parte, y en este caso a pesar de la ideología, Chávez envía señales de tranquilidad a la potencia: garantiza las inversiones en el país, promueve la participación de compañías extranjeras en la modernización y búsqueda de pozos y mantiene sus pagos de deuda externa al día. La razón de estado se reafirma en esta preservación de buenas relaciones en los ámbitos primordiales para ambos países, a pesar del ambiente que aparentemente los pondría en extremos distintos. Finalmente, en el ámbito regional Chávez ha pretendido convertir a Venezuela en la cuna de un proceso de integración continental, que evocando la imagen de Bolívar, consolide una potencia capaz de competir con la UE o EEUU. Este último aparentemente ha ganado esta batalla, pues está cerca de consolidar TLC's con tres países andinos y logrando gran apoyo de los gobiernos peruano, colombiano y ecuatoriano para la consolidación de este proyecto alternativo (en lo operativo, mas no en lo sustancial) al ALCA. La propuesta venezolana es poco

en tanto mantenga el respaldo popular, su liderazgo en el manejo de la OPEP y que el clima internacional no cambie drásticamente para mejor. Cuando alguna de estas variables cambie, su asidero clientelar (financiado por el petróleo) y democrático (ratificado hasta el cansancio con los múltiples referendos y elecciones) se debilitará y difícilmente logrará *resucitar* como lo hizo tras el golpe del 2002.

³⁴ Es necesario aclarar que en el sentido planteado por Kissinger, la *raison d'état* implica alcanzar aquello que le hace bien a un Estado en su objetivo de largo plazo (Ej.: delimitación de fronteras, elevación al status de poder hegemónico, consolidación de preferencias económicas y preeminencia política, etc.), aun cuando se lo deba conseguir por medios que rebasan consideraciones morales, éticas o filosóficas. Ver: KISSINGER, Henry, *Diplomacy*, Simon & Schuster, New York, 1994. Esta noción se ha presentado distorsionada en este documento a causa de la confusión entre los objetivos perentorios del jefe de estado, y los objetivos de largo plazo del Estado. Pero, en el caso de la Venezuela del gobierno de Chávez, ésta sería la búsqueda de la preservación de buenas relaciones con todo el sistema internacional (en especial con EEUU), a pesar de que desde *la forma*, la política exterior venezolana solo busque irritar al hegemon y actuar bajo valores ajenos a los mantenidos por los demás actores en ese sistema.

estructurada, y en el continente debe enfrentarse al contrapeso que necesariamente ejerce la visión brasileña, con mayor influencia y planes mejor estudiados. Muchas de las iniciativas en política exterior llevadas adelante por el coronel, antes que objetivos internacionales, tienen objetivos domésticos: crear (o consolidar, ya en este punto) ante el pueblo la imagen progresista, innovadora y valiente, capaz de enfrentarse a la primera potencia mundial por llevar a cabo el proyecto revolucionario. El imaginario creado por estas acciones idealiza a un personaje *del pueblo*, elevado a la instancia mayor de poder y capaz de ejecutar – por lo menos en la forma– su proyecto de Estado.

En Venezuela es clara la utilización de la política externa como herramienta de creación de lealtades en la política interna, a la vez que su razón de estado es incorporarse en el sistema político y económico internacional sin las limitaciones que enfrentan países como Cuba o Corea del Norte que tienen como razón de estado la construcción de un poder contestatario a la hegemonía estadounidense. Ecuador tiene una menor significación en el contexto internacional, y ello permite pensar que su razón de estado no difiere de la venezolana, y en realidad de aquella del mundo subdesarrollado. Extraer algún tipo de beneficios de este sistema supone separar la acción discursiva de la acción práctica cuando existe una ideología cimentada, como en el caso de Chávez. En el caso de Gutiérrez no ha existido tal separación, sino sometimiento de la una a la otra en dos momentos claramente definidos. Durante la campaña, la acción discursiva sometía a la práctica y se alineaba con la del líder venezolano cuando asignaba a la política exterior estadounidense una actitud netamente imperialista enfocada a garantizar sus beneficios económicos a través de la implementación del ALCA. A partir de este discurso Gutiérrez construyó una imagen cercana a la de Chávez, elevando las expectativas de la izquierda (en medio de este fervor se llegó a hablar de un eje opositor al neoliberalismo y al imperialismo: Chávez, Lula y Gutiérrez) y concretando el apoyo de unos votantes cansados de la política exterior de sumisión a los EEUU, considerada como el origen de los males ecuatorianos por la acción de las IFI's. El acceso a la segunda vuelta llevó a que Gutiérrez, como señala Felipe Burbano de Lara citado por Córdova, medie "... hacia los grupos de poder: empresarios, banqueros, FFAA, FMI, la Iglesia y el gobierno de los EEUU... en abierta seducción al poder, mostrándole su rostro bueno"(Córdova, 2004:247). Su acceso a la presidencia concretó tal seducción e hizo

que someta su acción discursiva a su acción práctica. El primer país que visitó no fue Venezuela o Cuba, como muchos esperaban, sino EEUU, donde declaró al Ecuador como “*el mejor amigo*” del gobierno de Bush y su aliado en la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Este alineamiento implícito en el enfoque estadounidense de enfrentamiento a la guerrilla colombiana, se ha extendido al combate de otras situaciones consideradas amenazas para la seguridad por Estados Unidos, como la migración ilegal, un tema en el que Gutiérrez justificó el hundimiento de barcos ecuatorianos, que presuntamente transportaban emigrantes ilegales, por naves norteamericanas en aguas internacionales. Desde la posesión de Gutiérrez se puede trazar con facilidad una línea de política exterior que sigue de cerca aquella que los Estados Unidos marca como correcta. La acción práctica *gutierrista*, en desmedro de su acción discursiva de campaña, señalan en primer lugar la debilidad del fundamento ideológico con el que accedió al poder y la preeminencia del marketing político durante la campaña. Para el ejercicio del gobierno, en tanto, el sometimiento ecuatoriano a las directrices políticas estadounidenses no nace únicamente de la necesidad de “... enfrentarse a la elección de ‘estar a favor o estar en contra’ del poder hegemónico”(Pérez Enríquez, 2004:16), misma que deviene de la maniquea doctrina Bush de política exterior, sino también de su necesidad de alcanzar una relativa mayor participación en el sistema internacional, misma que bajo la égida de EEUU se puede alcanzar con menor dificultad, siendo este un discurso que también necesita de un análisis más profundo en una ocasión posterior.

3. MVR y PSP: sus relaciones con la clase política.

MVR: la polarización como forma de gobierno

Tanto el partido venezolano como el ecuatoriano irrumpieron en la escena política como consecuencia de profundos cuestionamientos al orden y funcionamiento de la institucionalidad democrática y sus actores tradicionales. Los primeros análisis tras las victorias de Chávez y Gutiérrez llevaron a pensar en el agotamiento del partidismo tradicional, pero allí es donde radica la principal diferencia entre ambos procesos. En Venezuela el ascenso del MVR fue, en efecto, el reflejo contundente de este fin de la

*partidocracia*³⁵ que había demostrado su consunción con el inconcluso gobierno de Carlos Andrés Pérez. A partir de la victoria de Chávez se replantea la participación política en Venezuela, no solo porque el nuevo presidente es un hombre marginado de las relaciones partidistas de antaño, sino porque su planteamiento de campaña es justamente reformar esas relaciones y permitir constitucionalmente la inclusión de nuevos actores al ejercicio de la política, no solo desde la perspectiva de acceso a cargos públicos, sino desde la del control y participación ciudadana. Por ello, la Constitución Bolivariana permite otras instancias de participación a través de la revocatoria del mandato, la convocatoria popular a referéndum o la iniciativa legislativa popular.

Estructuralmente, sin embargo, estas reformas han provocado que surjan graves tensiones en la vida política venezolana. El reordenamiento de los espacios de ingerencia política ha dejado a los partidos tradicionales, AD y COPEI, completamente fuera de la administración pública, con lo que han perdido su rol tradicional de mediadores de favores entre el Estado y la clientela partidista. Las lealtades en un sistema clientelar se extienden tanto como la capacidad de gestionar aquello que se demanda de cada uno de los actores, cuando uno de ellos falla es difícil que el otro honre su parte del tácito “pacto” en que se ha fundamentado este sistema. Desde la oposición, estos partidos venidos a menos se han fortalecido a través de alianzas con los otros grupos de élite que han visto amenazados sus espacios de poder político y económico, con demócratas e intelectuales que a causa de los exabruptos autoritarios de Chávez han sentido amenazado el orden democrático, y, con quienes por razones meramente “estéticas” encuentran en el coronel al “repugnante otro”³⁶. Estos nuevos excluidos del sistema han logrado juntar una fuerza lo suficientemente poderosa como para llevar al país a un estado de polarización.

³⁵ Por partidocracia se entiende al poder estatal transferido a la acción de los partidos políticos, con las formas que estos tienen de relacionarse con sus electores. Debe recordarse que Rafael Caldera accedió a la presidencia en 1994 con el auspicio de un movimiento denominado Convergencia, siendo esta la última elección en que los partidos participaron como tales. A partir de entonces los movimientos se han multiplicado y han *despartidizado* la política de ese país.

³⁶ Esta concepción hace referencia al sentimiento generado entre las élites por la llegada al poder de un elemento ajeno a su círculo social, mismo que es considerado como advenedizo o arribista, aunque su acción en el gobierno “no [sea] muy diferente a la consuetudine de las élites tradicionales” (BUSTAMANTE, Fernando, *La política y la picaresca...* p.2). Ver también, DE LA TORRE, Carlos, *Populist seduction in Latin America: The Ecuadorian experience*, Center for International Studies, Ohio University Press, 2000.

Del otro lado de la ecuación, Chávez ha basado su estrategia en la personalización del sistema clientelar. Ha construido redes de favores que apuntalan su imagen, no la del partido como sucedía en el sistema que terminó en 1998, a través de la creación de la sensación de que los servicios entregados por el estado (principalmente los servicios de salud, de alimentación, de educación y de ayuda ante desastres) llegan gracias a una gestión personal del coronel. Los beneficiarios de estos “favores” son miembros marginales de la sociedad, generalmente habitantes de los límites urbanos y de los barrios más pobres en las grandes ciudades, donde los servicios básicos son inexistentes, existen altos niveles de pobreza e índices de criminalidad tan elevados que la policía opta por no controlarlos. El discurso *chavista* apela a sus sentimientos de exclusión, les ofrece inclusión al sistema a través del subsidio de sus básicas necesidades y de su militancia en los Círculos Bolivarianos (comités barriales de auto – ayuda financiados por el gobierno). Como en cualquier sistema clientelar, todos estos bienes se reciben a cambio de una lealtad incondicional a su benefactor. Pero existe un “valor agregado” en este sistema clientelar, y es que Chávez cuenta con las características físicas y el discurso (plagado de imágenes populares que van desde el béisbol hasta las aventuras sexuales) necesarios para convertirlo en un hombre de pueblo, para que en los barrios pobres se lo sienta culturalmente cercano. De esta manera se puede afirmar que el apoyo que recibe Chávez no nace únicamente de la cuenta beneficios – lealtades utilizada en el sistema clientelar, sino que también nace de la cercanía psicológica que genera entre estos grupos sociales.

Existen dos grupos claramente definidos, antagonistas en una lucha que no es únicamente política, sino de supervivencia mutua, unos por preservar sus beneficios actuales y defender a uno de los suyos, otros por recuperar aquello que una vez fue suyo. Es natural por lo tanto que la polarización venezolana se haya convertido en el *modus vivendi*, que tiende a romperse momentáneamente y volver a esta tensa estabilidad³⁷. La forma de gobierno de Chávez ha empujado a la profundización de los sentimientos que animan a estos grupos, eliminando del espectro político puntos intermedios entre pro chavistas y anti chavistas, un hecho que ha tenido como consecuencia divisiones importantes en la izquierda (se citó

³⁷ Los ejemplos más sensibles son la caída y retorno al poder de Chávez durante abril del 2002, la huelga iniciada por PDVSA entre diciembre 2002 y enero 2003, o la concreción del llamado a un referéndum revocatorio en su contra por la oposición, y su victoria con casi el 60%.

antes el caso del MAS). En este ambiente existen varios factores que juegan a favor del presidente: la carencia de líderes y de cohesión entre la oposición; las múltiples elecciones ganadas, que crean la sensación de éxito; y, principalmente, el apoyo de los sectores urbano – marginales con su versión particularista de clientelismo. Estos factores permitirían eventualmente resolver el punto muerto al que han llegado las relaciones entre opositores y gobiernistas. Mientras tanto, el personalismo de la gestión de Chávez, representa un problema de largo plazo. No existe cambio de liderazgos en el seno del MVR, por lo que cuando legalmente el coronel este obligado a abandonar el poder, aunque conserve un capital político importante, puede ser difícil hacer llegar al mismo público un *chavismo sin Chávez*³⁸. La experiencia peruana indica cómo el apoyo a una persona no es transferible, aunque se utilicen discursos, proyectos e imágenes que recuerden al predecesor.

PSP: gobierno del establishment

Deslumbrados por la sorpresiva victoria de Lucio Gutiérrez y la desastrosa derrota de los representantes tradicionales del partidismo ecuatoriano (Ej.: Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja), los resultados se comentaron como una muestra de la quiebra del sistema político ecuatoriano vigente desde 1979, tratando de asimilar este fenómeno al venezolano con Chávez o al peruano con Fujimori. Esta apreciación preliminar no consideró que los partidos tradicionales (en especial el PSC y la ID en Guayas y Pichincha respectivamente) todavía mantienen su importancia política gracias a la eficiencia de sus administraciones locales, un factor que probablemente incidió para que tras las elecciones legislativas estos partidos se conviertan en las dos primeras fuerzas políticas en el Congreso, mientras el éxito obtenido por Gutiérrez en la primera vuelta no filtró para los candidatos del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero. La debilidad del PSP podía equilibrarse gracias a la alianza con Pachakutik, pero tener a los indígenas como socios no impediría que la oposición obstaculice proyectos o procese iniciativas que coarten y debiliten la gestión

³⁸ Esta idea se la toma de la planteada por Catherine Conaghan sobre el Perú de Fujimori, donde se evidenció que ante la futura imposibilidad de una reelección, se probó el éxito que tendría un candidato similar a Fujimori en el discurso y la praxis y que se candidatase con su auspicio, por ello se lo llamó fujimorismo sin Fujimori. Los malos resultados de esta experiencia, intentada en la elección para la alcaldía de Lima, llevaron a que el presidente peruano pensara seriamente en su re – reelección, con lo que desencadenó una crisis política que lo obligó a dejar el cargo. Ver: CONAGHAN, Catherine, *The Irrelevant Right*, Alberto Fujimori and the new politics of pragmatic Perú, in *Conservative Parties, the Right and Democracy in Latin America* edited by Kevin J. Middlebrook, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press, 2000

presidencial. Los votos de esta coalición no equiparaban los del PSC o de ID, y, la profundidad de las reformas propuestas en el plan de gobierno, abría el espacio para la generación de fuertes tensiones con los representantes del *ancien regime*. Cómo se ha visto en el caso venezolano, la profundidad de las reformas que se pretenden hacer en la estructura del Estado es directamente proporcional al grado de malestar que genera el gobierno reformista en las élites políticas. Bustamante (2003) hace mención a que el objetivo a largo plazo de Sociedad Patriótica es incorporarse a la élite del sistema político ecuatoriano, tal como lo hicieron en su momento los Plaza, “el personal político empresarial del velasquismo, los Bucaram, los militares y los tecnócratas asociados a ellos en los regímenes castrenses ‘desarrollistas’”(3); pero en realidad, es todavía muy temprano para hacer este tipo de evaluación aunque las pobres expectativas electorales que genera la participación del PSP en las elecciones seccionales del 2004 eliminaría tal posibilidad, relegando a los Gutiérrez y su partido a una posición similar a la de Sixto Duran Ballén y el PUR después de la presidencia. Independientemente de la pretensión a largo plazo, en el corto plazo el objetivo era (y es) lograr la estabilidad política que le permita concluir el periodo presidencial sin mayores contratiempos. Ello ha provocado que el PSP, una vez engastado en la presidencia, tenga como estrategia “...buscar una mimesis adaptativa ‘oportunista’ que le permita establecer alianzas con los estamentos dominantes tradicionales por la vía de intercambios clientelares”(6) que incluyen la inacción en las reformas del Estado, continuidad en la política económica neoliberal, en resumen, el respeto al *status quo*. En esta lógica resulta mucho más funcional lograr alianzas con los partidos que detentan el mayor poder político antes que con un partido de poder secundario cuyos objetivos pueden atentar contra el ordenamiento político actual.

El cambio de socios en el gobierno ha signado la relación entre PSP y los demás partidos políticos ecuatorianos. En la instancia electoral fue Pachakutik, después han seguido el PSC, el PRE, y con cierta ambigüedad el PRIAN (aunque solo el primero fue formalmente su aliado). Con la ID la relación ha sido conflictiva, aunque la incorporación de Raúl Baca Carbo (ex militante de la ID, y figura referencial dentro del partido, luego de Borja) al ministerio de Gobierno puede interpretarse como la búsqueda de un espacio de negociación con los partidos de oposición “dura”, como en este caso, a pesar de los magros resultados.

Es importante anotar que estas alianzas son sumamente flexibles y, de cada lado de la mesa de negociación se aprecian con claridad los pedidos: PSP pide ayuda para preservar a Gutiérrez en Carondelet (sea que tome la forma de una alianza electoral con el PRE o el enjuiciamiento a los críticos de la cúpula militar), y los partidos negociadores piden la satisfacción de una necesidad puntual (respeto a la dolarización, el retorno de Abdalá Bucaram, puestos en la CSJ, no – elección del Contralor, etc.), misma que cuando no es atendida, genera una ruptura y el paso a la oposición. No obstante, la militancia en la oposición dura el tiempo que toma el apareamiento de una nueva necesidad.

Es cierto que este funcionamiento no desentona con la tradición clientelar ecuatoriana, pero es patente que la agenda de negociación de Sociedad Patriótica es resultado del instinto de supervivencia. Como consecuencia de este único objetivo, el gobierno se ha negado la capacidad de iniciativa en el manejo político del país, perdiendo el respaldo popular que le permitió ganar la elección, y provocando que entre los partidos políticos no exista el mínimo interés por vincularse en proyectos de largo plazo con el gobierno. Este ambiente es propicio para que los partidos tradicionales obtengan respuestas casi inmediatas a sus necesidades, jugando con la debilidad presidencial a través de recordar con asiduidad la opción de la sucesión y las posibilidades para su legitimación. Tras la ruptura Pachakutik trasladó su maquinaria política a la oposición, manteniendo una postura cercana a la ID. El paso por el gobierno no produjo rompimientos demasiado profundos en el brazo político del movimiento indígena, pero las lesiones más profundas las sufrió la CONAIE. En su relación con los indígenas Gutiérrez ha tenido claro cual es el camino a seguir: en vista de que atender sus demandas de reforma del estado puede ocasionar profundas inquietudes entre los viejos partidos políticos y poner en peligro su estabilidad, es mejor dividir al movimiento, que por su capacidad de movilización representa también una amenaza a su permanencia en el poder. Por ello en los momentos previos al fin de la alianza, los problemas de la relación los achacaba a la ambición desmedida de los mestizos del movimiento, después estableció relaciones directas con las comunidades entregando asistencia para el trabajo en el campo, se acercó a los indígenas evangélicos, tornando conflictiva la relación entre esta importante parcialidad y el grupo católico de la CONAIE, y, finalmente ha concretado el desmembramiento de una parte de los indígenas amazónicos

al nombrar a Antonio Vargas, su compañero en el golpe, como ministro de bienestar social, una secretaria desde la que se dirige la política asistencialista.

Este “...gobernar lo menos posible con la finalidad de mantenerse en el gobierno”(Sánchez Parga, 2004:46) ha generado un desgaste evidenciado en las mediciones de aceptación del presidente, mismas que se sitúan en un solo dígito. Este deterioro arrastra a los otros miembros del partido, que son por lo general figuras sin mayor trayectoria política. Los miembros menos deslucidos de la administración, en su mayoría no tienen vinculación alguna con el partido de gobierno, y ven opacada su gestión por las inconsistencias de la política comandada por el jefe de estado. La permanencia del PSP en el sistema político ecuatoriano, en lo práctico, peligraría por la inexistencia de figuras capaces de lograr seguidores cuando la capacidad de satisfacer a la clientela salga de sus manos. En lo legal, PSP esta amenazado por la ley de partidos políticos, pues de no contar con la votación mínima requerida, su registro desaparecerá, necesitando constituirse nuevamente si pretende intervenir otra vez en las elecciones. Finalmente, el saldo de las expectativas generadas en el 2000 y no cumplidas a partir del 2003, ha restado grandemente cualquier posibilidad de participación ulterior del presidente en la vida política activa, aunque en esta materia es imposible profetizar.

4. Conclusiones.

En Latinoamérica el ejercicio de la política ha adquirido formas sumamente diversas a lo largo de su historia. Las inequidades sociales, la debilidad institucional y la carencia de participación ciudadana en los procesos gubernamentales han abonado el nacimiento de gobiernos caudillistas, dictatoriales (por individuos o cuerpos colegiados), populistas, de pseudo – Mesías, de títeres de poderes institucionales como las FFAA o la Iglesia, entre otros más de una lista que se podría extender largamente. En tal ambiente, el surgimiento de nuevos actores que buscan inscribirse en la vida política de los países de la región no debería sorprender, y muy probablemente no lo hará cuando dentro de cincuenta o cien años se describan los procesos políticos de finales del siglo XX y de inicios del XXI en esta parte del mundo. El surgimiento del MVR y del PSP, en una perspectiva histórica de largo plazo, no se pueden considerar diferentes de lo que en su momento significó el surgimiento,

por ejemplo, de líderes populistas que fundamentaban su acción política en la retórica no sustentada cuando de un candidato “*respectable*” se esperaban doctos discursos teóricos e ideológicos. El planteamiento nacionalista militar, el mejor estilo populista de inflada retórica que señala culpables y promete darles “guerra a muerte”, y miles de esperanzados simpatizantes que alrededor de la tarima vitorean al líder militar como alternativa de solución para las necesidades civiles, pasara a la historia más bien como otra forma para conquistar los votos necesarios para elevarse a la presidencia, antes que como una innovadora manera de gobernar.

La aparición de estos partidos de militares que intervienen en la política civil cuenta con dos elementos que, a partir de revisar las experiencias venezolana y ecuatoriana, encajan con perfección y crean un peligroso ejemplo de fusión entre lo viejo y lo nuevo, entre la doctrina y el marketing. La doctrina militar, en el un extremo, ha formado a sus cuadros bajo la concepción de que la más importante responsabilidad institucional es preservar la subsistencia de la patria, con lo extensiva que puede ser la interpretación de este enunciado. Del otro, la construcción discursiva que recoge la noción de la defensa de la patria, reminiscente de las enseñanzas en los cuarteles, declara el rompimiento con el sistema político de antaño, al que se considera causante de los males actuales, y anuncia la refundación del Estado como el inicio de una nueva era de bienestar para todos.

La eficiencia electoral de esta fórmula en Venezuela señaló el camino a seguir para Gutiérrez, de la misma manera como lo puede hacer para futuros líderes que desde el interior de los cuarteles pretendan elevarse a la cima de la vida política civil para dirigir el Estado. Las reacciones militares ante crisis de la magnitud de la venezolana o la ecuatoriana en los momentos previos al golpe, no son novedosas *per se*, sino que se inscriben dentro de lo que se calificó como fenotipo militar: la intervención directa en política para poner en orden el sistema cuando las condiciones incentivadas por los políticos civiles han puesto en peligro la existencia del Estado. Así, los movimientos del 4 de febrero de 1992 y del 21 de enero de 2000, hubieran sucedido tarde o temprano bajo la égida de un líder militar que decida poner “*la casa en orden*”, al mismo estilo de lo que

fueron las intervenciones militares de 1972 o 1976 en Ecuador, o la de la Junta venezolana en 1948.

Así, como producto de una reacción que puede calificarse de natural por la corporación militar, se abrió una ventana para reproducir la experiencia de Chávez con otro coronel. En los momentos previos al acceso a la segunda vuelta del candidato de la Sociedad Patriótica se puede trazar una secuencia estricta en los discursos y métodos de campaña, donde el candidato ecuatoriano sigue de cerca lo que el venezolano hizo en su momento. Pero, la utilización de estos “...discursos antipolíticos que desvalorizan la política representativa, asimilan la clase política y los partidos con la corrupción y los acusan de ser los causantes de las crisis nacionales “(Montúfar, 2004:84) tiene elementos de fondo muy distintos, y estos son los que marcan el límite de esta imitación. Chávez, como se ha visto, nace de un movimiento con una larga construcción ideológica que rescata los planteamientos políticos de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora y pretende adaptarlos a la realidad venezolana desde 1982. Existen 15 años entre la formación del MBR-200 y la oficialización de la candidatura de Chávez por el MVR, un periodo en el que el proceso de mutación de uno a otro movimiento incorporó elementos ideológicos de una izquierda venezolana de larga tradición y experiencia política, a pesar de su carácter marginal durante los años del punto fijismo. Mientras tanto el PSP concretó una coalición estrictamente electoral con Pachakutik y el movimiento indígena, misma que no produjo aportes ideológicos por la irrelevancia que se observa que tiene este factor para el partido gobernante. A diferencia del MVR, el partido militar – civil ecuatoriano tiene un origen estrictamente coyuntural, que se remonta a declaraciones de Gutiérrez un año atrás del golpe, mismo que fue planeado por la dirigencia indígena y que buscó al actual presidente únicamente para concretar su aval, un mes antes de los hechos. Un hecho final resalta las características estructurales versus las coyunturales en los dos casos comentados: mientras en Venezuela el grupo electoral adquiere el nombre de *movimiento* (es decir, no partido sino anti – partido) y enuncia su deseo de creación de una nueva república (la quinta república), símbolos que se reafirman con la jura del cargo de Chávez (sobre una “*moribunda*” constitución); en el caso ecuatoriano aparece un Partido (contradictorio con el discurso anti – partidos que maneja) que evoca a las sociedades patrióticas coloniales que

discutían sobre la independencia (un elemento que podría darle estructura pero cuyo único respaldo es el discurso anti colonial usado por Chávez en Venezuela) y que menciona la fecha de una coyuntura (21 de enero, día del golpe de Estado), elementos que se suman al confuso discurso de posesión presidencial donde declaraba ambiguamente su “no-posición” ideológica (básicamente declarándose un presidente “ni de izquierda, ni de derecha”).

Ya desde la presidencia, la cercanía aparente de la campaña, desaparece casi por completo. Mientras Venezuela pasó por un proceso de reforma constitucional convocado *ipso facto*, Ecuador fue hacia la consecución de un acuerdo con los partidos tradicionales fuertes que pudieran garantizar la estabilidad del poder presidencial. Las políticas sociales han tenido aspectos radicalmente distintos, mientras en el caso venezolano, y gracias al actual precio del petróleo, el Estado ha financiado programas de gran alcance entre la marginalidad, en Ecuador se ha mantenido una tensión social que pasa de un sector a otro. En la relación con las IFI's ambos países han optado por el respeto a la ortodoxia, aunque por lo menos desde lo discursivo Venezuela ha perseverado en la búsqueda de proyectos regionales que se constituyan en una alternativa. En las relaciones con la vieja clase política y con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Chávez ha mantenido un antagonismo claro, al punto de convivir con una crisis política permanente en el país; en tanto, Gutiérrez se ha aliado estrechamente con ellos, como respuesta a la inestabilidad que podría surgir de su inacción. En las relaciones con las FFAA, Chávez ha preservado el antiguo sistema de prebendas para la institución, y las ha incorporado a la vida civil (y política) otorgándoles derecho a votar y vinculándolas con misiones de apoyo al desarrollo. Gutiérrez también ha preservado el *status quo*, pero la debilidad institucional después del 21 de enero, ha llevado a continuos sobresaltos que han obligado al Alto Mando a reiterar varias veces su respeto a la constitucionalidad, mientras que el Presidente ha buscado acercarse a los mandos a través de ascensos e incrementos salariales.

Estos hechos tan distintos, evidencian sin embargo una realidad de fondo que es cercana: ambos presidentes necesitan utilizar cualquier artilugio que tengan a mano para mantenerse en el ejercicio del poder en el corto plazo. La polarización que afecta a Venezuela ha llevado a que Chávez utilice toda la política del Estado como una herramienta de política

doméstica que le permita fortalecer su clientela y debilitar a la oposición. Gutiérrez ha optado por la negociación con los partidos, una forma de clientelismo que tiene un alto costo para la imagen presidencial, lo que hace que necesite nuevamente el favor de estos para conservar su lugar.

Evidentemente, la aparición del MVR y del PSP obligó a una reflexión sobre la subordinación de la institución militar y la eficiencia del sistema político imperante en los dos países. Su intervención en la candidatura presidencial demostró el poder de convocatoria que puede tener un discurso antipolítico, mesiánico y populista; pero el tema de campaña como forma de gobierno arroja un resultado preocupante, pues conduce a la polarización o lleva al presidente a entregarse en manos de aquellos a quienes combatió debido a su imposibilidad de ejecutarlo. Esto lleva a pensar en la diferencia trascendental que ha significado la intervención política de estos partidos en Venezuela y en Ecuador, pues, en el primero el gobierno ha aceptado el reto que implica el cambio del sistema político, mientras que en el segundo, el discurso de campaña ha sobrepasado largamente a la acción. De esta forma, y para concluir, se puede plantear la siguiente valoración que no pretende indicar positivos o negativos, sino hechos relativos a la estructura política de los países analizados: Venezuela después de Chávez no será la misma, mientras que Ecuador después de Gutiérrez seguirá siendo exactamente el mismo.

Bibliografía.

- ACOSTA, Alberto
 - Ecuador: Deuda externa y migración, una relación incestuosa, biblioteca virtual de CLACSO, 2002, www.clacso.org
- AYALA, Enrique
 - Ecuador, Patria de todos, Manual de Cívica, UASB – Corporación Editora Nacional, Quito, 2004
- BUSTAMANTE, Fernando
 - Los militares y la creación de un nuevo orden democrático en Perú y Ecuador, Documento de trabajo, Programa FLACSO, Santiago de Chile, No. 370, Marzo 1988.
 - La política y la picaresca: reflexiones sobre el no tan nuevo orden de la “Sociedad Patriótica”, en Revista ECUADOR DEBATE, No.61, CAAP, Quito, Diciembre 2003, www.dlh.lahora.com.ec
- CABALLERO, Manuel
 - La gestación de Hugo Chávez: 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000.
- CONAGHAN, Catherine, The Irrelevant Right, Alberto Fujimori and the new politics of pragmatic Peru, in MIDDLEBROOK, Kevin J (ed), Conservative Parties, the Right and Democracy in Latin America, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press, 2000
- Constitución de la República de Venezuela (1961), Base de Datos Políticos de las Américas, www.georgetown.edu/pdba
- Constitución Política de la República del Ecuador.
- CORDOVA, Carlos
 - La emergencia de outsiders en la región andina: Análisis comparativo entre Perú y Ecuador, en Revista ECUADOR DEBATE, No.62, CAAP, Quito, Agosto, 2004.
- CORREA, Rafael
 - La convertibilidad argentina y la dolarización ecuatoriana, ponencia para la mesa redonda "¿Es posible una salida ordenada de la dolarización? Lecciones de Argentina", FLACSO, Quito, Febrero 11 del 2003.
- DE LA TORRE, Carlos
 - Populist seduction in Latin America: The Ecuadorian experience, Center for International Studies, Ohio University Press, 2000.
- Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Real Academia Española de la Lengua, 2003 (edición electrónica, versión 1.0)
- ELLNER, Steve
 - Leftist goals and the debate over anti-neoliberal strategy in Latin America, en Science and Society, Vol.68, No.1, Guilford Publications Inc., Spring 2004
- FITCH, Samuel
 - The military Coup d’État as a political process: a general framework and the Ecuadorian case, en LOWENTHAL, Abraham and FITCH, Samuel, Armies and Politics in Latin America, Holmes & Meier, New York, 1986

- Hacia un modelo democrático en las relaciones civiles militares para América Latina, en Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica, CORDES, Quito, 1988.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis y PATRUYO, Thanali
 - Venezuela: entre la esperanza popular y la crisis económica, Sala de Lectura CLACSO, 1999, www.clacso.org
- HERNÁNDEZ, José et al.
 - 21 de enero, la vorágine que acabó con Mahuad, C.A. El Comercio, Quito, 2000.
- HUNTINGTON, Samuel
 - El Soldado y el Estado, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1995
 - Fuerzas Armadas y Sociedad: reformando las relaciones cívico militares, en La Política, revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad, No. 2, Segundo semestre, 1996.
- KISSINGER, Henry
 - Diplomacy, Simon & Schuster, New York, 1994
- LARREA, Carlos
 - Pobreza, Dolarización y Crisis en el Ecuador, Ed. Abya-Yala, Quito, 2004
- LOPEZ MAYA, Margarita, y LANDER, Luis
 - Venezuela, golpe y petróleo, biblioteca virtual de CLACSO, sf. www.clacso.org
- LOVEMAN, Brian
 - For La Patria, Politics and Armed Forces in Latin America, Scholarly Resources, Wilmington, 1999
- MANRIQUE, Miguel
 - Participación política de las Fuerzas Armadas venezolanas en el sistema político, en COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, Las Fuerzas Armadas en la Región Andina ¿no deliberantes o actores políticos?, CAJ, Lima, 2001
- MARTINEZ, Elena
 - La formación de una nueva clase política en Venezuela: ¿un cambio para seguir igual?, en RAMOS JIMÉNEZ, Alfredo (ed.), La transición venezolana, aproximación al fenómeno Chávez, Centro de Investigaciones de Política Comparada, Universidad de los Andes, Mérida, 2002
- MONTUFAR, César
 - Antipolítica, representación y participación ciudadana, en Revista ECUADOR DEBATE, No.62, CAAP, Quito, Agosto, 2004.
- MÜLLER – ROJAS, Alberto
 - Las relaciones político – militares en Venezuela, en Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica, CORDES, Quito, 1988
- OLANO, Aldo
 - El Perú del Siglo XX, Ensayos de política, economía y sociedad, European Press Academic Publishing, 2001
- PEREZ ENRIQUEZ, Diego
 - Fuerzas Armadas ecuatorianas: 2004, en Revista ECUADOR DEBATE, No.62, CAAP, Quito, Agosto, 2004.
- RIAL, Juan

- El referente de las organizaciones militares de América Latina. Estados y Regímenes políticos débiles, 2001, www.resdal.org
- RIVERA, Freddy
 - Democracia minimalista y “fantasmas” castrenses en el Ecuador contemporáneo, en COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, Las Fuerzas Armadas en la Región Andina ¿no deliberantes o actores políticos?, CAJ, Lima, 2001
- ROMERO JIMÉNEZ, Juan
 - La nueva dinámica de poder en Venezuela: el MVR, Hugo Chávez y el proceso constituyente (1999), Laboratorio de Investigación Transdisciplinario del Espacio Público (LITEP). La Universidad del Zulia-Venezuela, http://clio.rediris.es/articulos/poder_venezuela.htm
 - Discurso y filosofía política en Hugo Chávez (1996-1998), en Revista ECUADOR DEBATE, No.55, CAAP, Quito, Abril, 2002
www.dlh.lahora.com.ec
- ROUQUIÉ, Alain
 - L'État militaire en Amérique Latine, Éditions du Seuil, Paris, 1982.
 - Demilitarization and the Institutionalization of military – dominated polities in Latin America, en LOWENTHAL, Abraham and FITCH, Samuel, Armies and Politics in Latin America, Holmes & Meier, New York, 1986
- SANCHEZ PARGA, José
 - ¿Por qué se deslegitima la democracia? El desorden democrático, en Revista ECUADOR DEBATE, No.62, CAAP, Quito, Agosto, 2004.
- STEPAN, Alfred
 - Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone, Princeton University Press, Princeton, 1988.
- SYLVIA, Ronald y DANOPOULOS, Constantine,
 - The Chávez phenomenon: political change in Venezuela, Third World Quarterly, vol. 24, No. 1, Carfax Publishing, Oxford, 2003.
- THORP, Rosemary
 - Progreso, Pobreza y Exclusión, Banco Interamericano de Desarrollo, 1998.
- VICIANO, Roberto y MARTINEZ, Rubén
 - Cambio político y proceso constituyente en Venezuela (1998 – 2001), Vadell Hermanos Editores C.A., Caracas, 2001
- WALSH, Catherine
 - The Ecuadorian political irruption, Uprisings, Coups, Rebellions and Democracy, en Nepantla: Views from South, Volume 2, Issue 1, Duke University Press, 2001.

Internet

- El Latinoamericano, www.ellatinoamericano.cjb.net, Como es Lucio Gutiérrez, militar progresista, surge un Chávez ecuatoriano, sf.
- Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, www.sociedadpatriotica.com

Prensa

- Diario EL COMERCIO
 - LUHNOW, David y DE CORDOBA, José (The Wall Street Journal), El populismo económico es el otro vencedor del referendo venezolano, Miércoles 18 de agosto de 2004, p. B3

- El relevo del máximo jefe de las FFAA se esperaba hace 3 meses, Miércoles 4 de agosto de 2004, p. A6
- En las FFAA se desató una cacería de brujas, Jueves 22 de abril de 2004, p. A6
- Las Fuerzas Armadas a la Nación (remitido), Miércoles 14 de abril del 2004, p. A7
- Las cifras del 2000 cuadran, sin embargo..., Lunes 1 de enero del 2001, p. A9
- VALLEJO, Raúl, Si el Presidente cambiara, Sábado 1 de enero del 2000, Opinión, p. A4.
- Diario EL UNIVERSO
 - TORRES, Carlos, Venezuela, un país partido en dos, domingo 22 de agosto del 2004, p. A12.
- Quincenario Tintají
 - LUCAS, Kintto, El rostro oculto del coronel, No.32, 2da. quincena, octubre, 2003.
 - QUITO, Julián, Las transfiguraciones de Gutiérrez, No. 38, 1ra.quincena, febrero, 2004.